

50.ª SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 22 DE 1883

Presidencia del señor MADERO

Ministro presente: del interior.

Senadores presentes: Avellaneda, Baibien, Baltoré, Barros, Bayo, Cambaceres, Carrillo, Corlés, D'Amico, Dávila, del Valle, Febre, Gelabert, Igarzábal, Juárez Celman, Mendoza, Moyano, Navarro, Nougés, Oliva, Ortiz, Rodríguez y Zapata.

Senadores ausentes, con aviso: Alvear, Gómez y Santillán.

Senadores ausentes, con licencia: Bárcena, Civit e Iriondo.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados.

2.—Continúa la discusión pendiente sobre la cesión de la Villa de Posadas para la capital de Misiones. Se aprueba el dictamen de la mayoría de la Comisión.

—En Buenos Aires, a veintidós de Septiembre de mil ochocientos ochenta y tres, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente y los señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores senadores Bárcena, Civit e Iriondo, con licencia, y los señores senadores Alvear, Gómez y Santillán, con aviso.

Leída y aprobada el acta de la anterior de 20 del corriente (49ª ordinaria), se dió cuenta de los asuntos entrados, a saber:

1

Poder Ejecutivo

Dos notas acusando recibo a las del Honorable Senado por las que se comunicaba la sanción definitiva de los proyectos de ley:

1º Por el que se acuerda a la señora María Ponce de Percyra e hijas solteras la pensión mensual de ciento diecisiete pesos.

2º Por el que se declara al teniente 1º con grado de capitán, don Cipriano Miró, comprendido en los beneficios que acuerda la ley de 24 de Septiembre de 1868.

Otra nota, pidiendo la devolución de varios expedientes, excluidos por la Comisión de Hacienda, a los créditos solicitados por el Poder Ejecutivo con fecha 30 de Mayo y 1º de Agosto del corriente año. (Concedido). Al archivo.

Solicitudes particulares

Doña Analía Reboredo solicita pensión graciable en mérito de los servicios prestados por los coroneles Pedro y Segundo Roca y sargento mayor Francisco Roca, guerreros de la Independencia. A la Comisión de Peticiones.

—El sargento mayor don Martín Rivadavia pide se le aumente la pensión de que actualmente goza. A la Comisión de Guerra.

—Doña Herminia R. de González solicita un auxilio pecuniario para la impresión de la obra titulada *Concordancia de los fallos de la Suprema Corte de Justicia Nacional con las leyes de Procedimientos de Justicia*. A la Comisión de Peticiones.

Despachos de Comisión

La del Interior, en el proyecto de ley en revisión, disponiendo se levanten los planos y presupuesto para la construcción de una casa destinada al Congreso de la Nación.

La de Hacienda, en el proyecto de ley en revisión, aumentando en 1,074,543,49 pesos moneda nacional la emisión en fondos públicos, autorizados por ley de 25 de Septiembre de 1881.

La de Guerra, en la solicitud de la viuda del teniente coronel Seguí, pidiendo pensión graciable; y en la petición de don Juan Richmond, en representación de los hijos menores del finado teniente coronel de marina don Luis Piedrabuena. A la orden del día.

2

Sr. Igarzábal. — Pido la palabra, para hacer una rectificación.

Cuando en la sesión anterior argumentaba yo contestando al honorable senador por Buenos Aires con la jurisprudencia de Estados Unidos, afirmé que había cesiones de territorios poblados hechas por los Estados en favor de la Unión, para que en aquellos territorios se constituyeran gobiernos provisionales, mientras adquirirían la importancia necesaria para ser erigidos en Estados. El honorable senador por Buenos Aires y también el señor senador por Corrientes que está presente, afirmaron decididamente que esto no era exacto. Cité a Story, y dijeron que Story no decía lo que yo afirmaba.

Contesté que si el Honorable Senado me daba el tiempo, apenas un cuarto intermedio, para traer las pruebas, se las presentaría inmediatamente.

No es por mi propósito ni por mi voto que este debate se ha prolongado hasta la presente sesión; pero ya que esto ha tenido lugar, aprovecho la ocasión para presentar a la Cámara las pruebas de lo que yo afirmaba.

Esas pruebas tienen tres autoridades. Primera, la autoridad del mismo Story en su texto inglés; segunda, la historia de los Estados nuevos que se agregaron a los trece primitivos de la Unión Americana, escrita por Paul Odent, al hacer la traducción de Story, y por último, los antecedentes oficiales de Estados Unidos, que ha consignado como notas en la traducción de Odent el ilustrado señor Calvo.

He aquí, señor presidente, lo que dice Story en la página 216, libro 3º, de su obra en inglés: «El 2 de Abril de 1790 (Estatutos at large, página 106) el primer Congreso sancionó una ley aceptando una escritura de cesión hecha por Carolina del Norte de aquel territorio que más tarde fué erigido en el Estado de Ten-

nessee. La cuarta condición expresa en esta escritura de cesión, después de disponer que habitantes del territorio serán temporalmente gobernados de la misma manera que aquellos que están más allá del Ohio, está seguida por estas palabras: «Siempre que ningún reglamento que fuere hecho por el Congreso tienda a emancipar los esclavos.»

Ya había hasta esclavos en el territorio que cedía Carolina del Norte; y si la Honorable Cámara quiere saber cuál era la población de ese territorio, tengo aquí los datos oficiales.

La aceptación por el Congreso de la cesión fué en 1790 y el censo de ese mismo año da al territorio del Tennessee 35.791 habitantes. Esto puede verse en las notas del señor Calvo a la traducción de Story, tomo I, página 155.

Como si estos datos no bastasen agregaré lo que dice Odent que, ampliando a Story en sus noticias sobre los nuevos Estados — tomo I, página 145 — expresa que: «En 1777, el territorio ocupado por los colonos del Tennessee fué erigido en Condado. (En 1777 ya era condado bajo el nombre de Washington.) En 1783 fué puesto bajo la protección de Carolina del Norte y tomó el nombre de Condado de Davison. Fué cedido a Estados Unidos en 1789 — dato que coincide con lo que dice Story: «la cesión fué en 1789 y la aceptación del Congreso en 1790, a principios del año, el 2 de Abril —, y en 1796 fué recibido en la Unión Federal.»

Estas, como he dicho, son palabras de Paul Odent. Una nota del señor Calvo dice que la ley de erección de este Estado fué del 1º de Junio de 1796 — tomo II, página 172 — y se refiere para estos datos a los estatutos in extenso de Estados Unidos que están actualmente en la Biblioteca Nacional, tomo I, página 491.

Esto en cuanto al Estado de Tennessee.

Voy a presentar otro caso y no molestaré más la atención de la Cámara.

El mismo Story en su obra inglesa, libro III, página 216, dice lo siguiente: 1º «Estatutos at large. El 7 de Abril de 1798, página 649, se pasó una ley para establecer un gobierno en el territorio del Missisipi igual en un todo al que se ejercía en el territorio Nordeste del Ohio, excluyendo el último artículo de la ordenanza hecha por el gobierno y aprobado por el Congreso el 13 de Junio de 1787.

Cuando los límites de estos territorios se habían arreglado amistosamente con Georgia, y ésta había cedido todos sus derechos a aquel territorio, en el contrato de cesión, se estableció que la ordenanza del 13 de Julio de 1787 regiría en todas sus partes en el territo-

rio con la única excepción del artículo que prohíbe la esclavatura.

El gobierno de este territorio fué establecido y organizado por la ley de 10 de Mayo de 1880, pero incluída la parte de la ordenanza que prohibía la esclavitud, no se puso en práctica allí.

Por estos datos se ve que Georgia cedió en 1798 el territorio en que se erigió más tarde el Estado de Missisipi.

El Congreso aceptó esta cesión el 10 de Mayo de 1800.

En ese año se levantó el censo de aquel territorio y resultó haber allí 8.850 habitantes, según puede verse en las notas del señor Calvo, en el mismo tomo página 156 de la traducción Story.

Paul Odent, ampliando los datos de Story en el tomo I, página 150, de la traducción de Calvo, refiriéndose a este mismo territorio dice:

«El Estado de Missisipi tiene también por fundadores los franceses, que empezaron a fines del siglo XVII a establecerse en el Missisipi.»

Agrega algunos datos más y concluye con esto: «Como el clima era saludable y la tierra excelente, varios soldados franceses habían venido a establecerse allí después de haber obtenido su baja. Este país pasó a la denominación inglesa de la denominación francesa por el tratado de 1863» y el señor Calvo en la nota del tomo II, página 172 dice: «El Estado de Missisipi fué erigido por ley de 10 de Diciembre de 1817 en el territorio cedido por Georgia», y esto lo tomó él de los estatutos generales de Estados Unidos, es decir, de los documentos oficiales de aquel país; tomo II, página 172.

Por esto, resulta, señor presidente, que en la Unión Americana ha habido cesiones de estados de la Unión de territorios que en el momento que eran cedidos tenían una población. Tiene treinta y cinco mil y tantos; Missisipi ocho mil y tantos.

Si he traído estos antecedentes, señor presidente, es para justificar las citas que había hecho en la sesión anterior y para mostrar a la Cámara que no soy capaz de hacer afirmaciones que puedan inducir a error.

Sr. Baibiené. — Pido la palabra.

Señor presidente: la luminosa discusión habida en la sesión anterior del Senado, ha versado, principalmente, primero, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de la Legislatura de Corrientes; y segundo, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la aceptación o aprobación de este acto, como lícito, por parte del Congreso.

Al entrar en este debate, señor presidente, necesito hacerme cargo detenidamente de los hechos precursores de la cesión de la villa de Posadas a la Nación, por la Legislatura de Corrientes, y de todas las circunstancias que la rodean, porque deseo considerar esta cesión en sí misma, como acto espontáneo y libre de lo que se llama una Legislatura, antes de someterla al criterio de las disposiciones y previsiones constitucionales y antes de juzgarla también del punto de vista de las conveniencias nacionales o provinciales.

Los hechos son los siguientes, señor presidente: El gobernador de Misiones se dirigió al Ejecutivo nacional, manifestándole la necesidad y la conveniencia de anexar la villa de Posadas al territorio de su mando para erigirla en su capital, y el Poder Ejecutivo, sin más antecedentes ni fundamentos ostensibles que las visitas de aquel señor gobernador, se dirigió inmediatamente al de la provincia de Corrientes y le exigió la cesión formal de la villa de Posadas, con más un territorio de cincuenta y tantas leguas, perfectamente poblado.

El gobierno de Corrientes recibió la nota del Ministerio del Interior, en que esta exigencia se le hacía, y la guardó en la más sigilosa incógnita, remitiéndola después de muchos días al presidente de la Legislatura, con el mensaje y proyecto consiguientes.

El hecho se trasluzó, sin embargo, y la opinión empezó a agitarse en la Capital y en todas partes de una manera inesperada en tiempos tan aciagos como los que corren para aquella tan desgraciada provincia.

El gobernador, señor Soto, manifestaba privadamente a los amigos que lo interpelaban sobre este hecho, declarando que renunciaría a su puesto antes de firmar la promulgación de la ley que desmembrara su provincia natal.

El ministro de gobierno, doctor Derqui, que había hecho ostentación en todas las formas de sus opiniones contrarias a la federalización del territorio de Misiones, cuando esta cuestión se puso en tela de juicio en la prensa y en el Congreso, esquivaba ahora toda explicación y toda conversación sobre la nueva mutilación de la provincia, que por su intermedio se buscaba.

Sometido el asunto a estudio de la Comisión respectiva de la Legislatura, lo despachó ella favorablemente, y ésta se reunió para sancionar la ley el 22 de Agosto del año pasado.

Abierta la sesión ante una numerosa y selecta barra, según lo dice un periódico de aquella localidad, a moción del diputado Antonio o Francisco Garrido — es un poco difícil re-

Septiembre 22 de 1883

CAMARA DE SENADORES

32ª Reunión, 50ª Sesión ordinaria

cordar los nombres de estos personajes recién salidos a la superficie —, a moción del diputado don Francisco Garrido, uno de los agentes electorales y a *luz* del coronel Roca, se resolvió tratar la cuestión en sesión secreta, y así se hizo, mandando se desalojara la barra. Los ministros, que habían sido llamados por repetidas veces para que asistieran a aquella sesión, se negaron rotundamente y no asistieron.

Estos son los hechos, señor presidente, tales como han pasado; y aunque de suyo son bastante significativos y arrojan la suficiente luz para poder apreciar la falta de voluntad y de espontaneidad por parte de los poderes públicos de la provincia de Corrientes, para hacer la cesión de Posadas y para inferir, por consiguiente, la coacción o la presión bajo la cual procedían, es indispensable tomar en cuenta, como elementos necesarios de comentario, el momento en que esos sucesos se producían y aquellos que les precedieron de inmediato.

El gobierno de Gallino acababa de ser derrocado, señor presidente, tomando una parte principal e inmediata el personal del batallón de línea a las órdenes del gobernador de Misiones, como se ha afirmado de mil maneras fidedignas y repetido en este mismo recinto, sin contradicción alguna.

Sr. Moyano. — El señor Gallino lo ha negado.

Sr. Gelabert. — ¿Dónde?

Sr. Moyano. — En todas partes.

Sr. Gelabert. — Esa afirmación la he hecho como senador del pueblo correntino y no puedo dejar de sostenerla.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes; el señor senador usará de ella cuando la pida.

Sr. Baibiene. — Sobre esto no hay dos opiniones, en ninguna parte, señor presidente.

La organización de la nueva situación se hacía bajo la presión de estas circunstancias; y el gobernador de Misiones, coronel Roca, dueño absoluto de la situación, imponía el nombramiento de las principales autoridades departamentales, y designaba para ser elegidos como diputados aquellos que habían de responder a sus designios.

Debe tenerse presente que este señor gobernador de Misiones, siempre residiendo en la capital de Corrientes, lejos del punto donde tenía que llenar sus deberes y su misión, no ocultaba ya, por entonces, su aspiración a la gobernación de Corrientes.

La caída de Gallino había sido estrepitosa y producido el efecto más terrible; la impresión profunda que había causado en los espí-

ritus duraba aún, y cualquiera que observara lo que pasaba en Corrientes hasta seis u ocho meses después, hubiera dicho, señor presidente, que estaba aquella ciudad sitiada por una tribu de indios malones, o que gobernador, ministros y empleados, cada vez que entraban en la casa de gobierno, encontraban en sus paredes las fatídicas palabras del festín de Baltasar.

Sr. Juárez Celman. — Cuatro días después estaban de baile el gobernador y sus ministros.

Sr. Baibiene. — De baile forzado.

Sr. del Valle. — Creo que festejaban el haber encontrado el anillo.

Sr. Juárez Celman. — Estas aseveraciones son completamente impertinentes y sin fundamento alguno.

Sr. Baibiene. — Yo las hago bajo la fe de mi palabra, que si no merece respeto al señor senador, la merece a muchos hombres honrados que no cifran ningún interés mezquino en esta cuestión. (*Aplausos en la barra*).

Sr. Presidente. — Advierto a la barra que le está prohibida toda clase de manifestaciones, y que si insiste en estas demostraciones me verá en el caso de hacerla desalojar.

Sr. Juárez Celman. — No me merecen fe las palabras del señor senador, porque me consta todo lo contrario, y sobre todo porque la Cámara no puede proceder en esta clase de cuestiones bajo la fe de la palabra de nadie, sino por lo que le consta.

Sr. Baibiene. — Ahora bien, señor presidente, hecha la enumeración de todos estos hechos, pintada la situación moral y material, diré así, en que se encontraba la provincia de Corrientes en aquellos momentos y sus poderes públicos mismos; si yo fuera un abogado que plicitease en contra de la cesión de Posadas ante los tribunales, antes de contestar la demanda y de entrar, por consiguiente, a dilucidar la cuestión de si la Legislatura estuvo o no facultada para hacer esta cesión, y si el Congreso debe o no contestar, señor presidente, fundado en la violencia ejercida sobre aquel Cuerpo para arrancarle el acto de que se trata; fundado en que aquella Legislatura, en el alto concepto que este noble vocablo tiene para los pueblos libres y civilizados de la tierra, no era una Legislatura; era una reunión de hombres hecha por medio de la fuerza y sacada de los últimos fondos de una sociedad conmovida y revuelta a impulsos de ambiciones y cupideces que no se pueden mencionar ni comentar en este recinto sin ofender al Honorable Senado.

Traidores a la patria calificados; heces impuras de aquella sociedad sobrenadando; tales

son los elementos de que con raras excepciones estaba compuesta aquella Legislatura.

Apoyaría también, señor presidente, mi articulación en la clandestinidad de estos hechos, que resulta de todas las circunstancias que he mencionado, clandestinidad contraria a la excelencia de nuestras instituciones, que es de luz difusa, o de discusión amplia y completa, de control positivo.

Alegaría, además, señor presidente, que la iniciativa de donde ha partido este proyecto, es inadmisibles, pues no es posible establecer ni admitir que un simple comandante de frontera pueda venir ante el Congreso, cualquiera sea el conducto de que se valga, a promover la desmembración de un Estado federal o la creación de otros.

Y voy más lejos en este terreno, señor presidente: yo no admito que el Poder Ejecutivo deba ni pueda por sí, sin previa consulta y adquisición del Congreso, establecer gestiones con las legislaturas provinciales para obtener este género de desmembraciones y de cesiones que traen un gran trastorno en el orden interno de la República, disminuyendo la población de un Estado, trastornando su sistema rentístico, dando ocasión a otros a que provincias nuevas se constituyan y deban dictar sus constituciones respectivas, a que las rentas de la Nación misma se vean comprometidas por las necesidades de estos nuevos Estados que se crean y que pudieran no tener los recursos suficientes para subvenir a las exigencias de su presupuesto.

Alegaría, pues, de nulidad de los procedimientos del Poder Ejecutivo en este caso, y estaría seguro de que, ventilada la cuestión ampliamente, sería fallada favorablemente.

Yo no creo, señor presidente, que en ninguno de los casos de cesiones que se han citado, se haya procedido por este género de iniciativas del Poder Ejecutivo; y, a falta de alguno en que apoyarme para sostener mi teoría, tengo lo que ha pasado con respecto a la federalización de la ciudad de Buenos Aires para la Capital de la República.

Siempre que este asunto se ha traído al debate, ha sido primero en el Congreso de la Nación, dejándose para último trámite la cesión de la Legislatura.

También cuando se ha tratado de federalizar el territorio de Misiones, se ha procedido presentando un proyecto de ley al Congreso, que traía un artículo en que se decía: mediante la cesión de la provincia de Corrientes.

En todos esos casos citados por el señor senador por San Juan, estoy seguro, que, en unos,

son las legislaturas de los Estados espontáneamente y mirando a sus conveniencias, y en otros, es el Congreso quien, después de resolver sobre la necesidad de la adquisición de tales o cuales territorios para la formación de tales o cuales Estados, ha dictado la ley para que se hagan las gestiones necesarias a fin de obtenerlos.

¿Adónde nos llevaría, señor presidente, esta manera de proceder, que fueran los comandantes de fronteras, los que, procediendo con su sólo criterio y bajo la inspiración de sordidos intereses tal vez, pudiesen venir al Congreso a decirte — fuera o no por intermedio del Poder Ejecutivo — es necesario formar aquí un nuevo Estado, es necesario anexar esta villa o este territorio a este otro, del cual estoy encargado?

Estos solos antecedentes, señor presidente, estoy seguro, procediendo rectamente y creyendo en la verdad de ellos, serían bastantes para inclinar el juicio del Senado en contra de este proyecto.

Pero debo, yo también, entrar, señor presidente, en la interpretación o discusión de las disposiciones constitucionales que tienen afinencia con este asunto.

Es lo más evidente, lo más indiscutible que la Legislatura de Corrientes, aun suponiendo que fuese una Legislatura como es debido, no ha podido hacer esta cesión, porque no estaba facultada para ello, pues, por el contrario, le estaba vedada expresamente por la Constitución provincial.

El artículo 2º de la Constitución de Corrientes dice lo siguiente: «Los límites de su territorio son: al Sur, el río Guayquiraró, en su desagüe al río Paraná y el arroyo Mocoretá, en su desagüe al río Uruguay, al Este, el río Uruguay, al Norte el río Paraná, hasta el Pequiriguazú y San Antonio Guazú; al Oeste, el mismo río Paraná, y todas las demás tierras en cuya posesión se halla, sin perjuicio de lo que resolviese el Congreso nacional, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 67, inciso 14 de la Constitución de la República.»

Y bien, señor presidente, nada puede ser más explícito y terminante que lo que prescribe este artículo de la Constitución de la provincia.

Su Legislatura no puede alterar los límites que la misma Constitución asigna a aquella provincia, pues sólo al Congreso le atribuye esa facultad, poniéndose de acuerdo con las disposiciones de la Constitución nacional.

Si en vista del artículo 13 de la Constitución nacional, que supone la posibilidad de que se formen dos o más Estados, de uno solo, en el territorio cedido por otro Estado, la Constitu-

ción provincial hubiese querido atribuir a la legislatura la facultad de ceder territorios a la Nación, y con este objeto, aquí, donde dice en su artículo 2º, «sin perjuicio de lo que disponga el Congreso nacional», etcétera, habría dicho, y «sin perjuicio de las cesiones que la Legislatura haga con el objeto previsto en el artículo 13 de la Constitución nacional»; y además, en el capítulo en que trata de las facultades de las legislaturas, habría consignado en un artículo la manera de usar de esa facultad.

Nada de esto hay en la Constitución provincial, señor presidente, y lejos de eso, se encuentra en ella expresada perfectamente su voluntad de que la Legislatura no ejercite semejante facultad.

Pero a esto se objeta, señor presidente, que una deficiencia de una Constitución provincial, no puede obstruir o paralizar el ejercicio y aplicación de las disposiciones de la Constitución de la República.

Yo contestaré a esta objeción, señor presidente, con un texto que tengo aquí y que voy a permitirle leer.

«La Constitución al referirse al acuerdo de este poder local, supone que en la Legislatura reside la facultad de fijar los límites de las provincias. Sin embargo no es así. Las constituciones locales fijan sus límites respectivos por regla general, extendiéndose a todo el territorio de que están en posesión.

«Esta circunstancia hace que la Legislatura, poder creado y subordinado a la Constitución, no tenga facultad de alterar aquellos límites, a menos que la misma ley fundamental se la confiera expresamente.

«El consentimiento, pues, de una o más legislaturas a que se refiere este artículo (artículo 13), debe entenderse en aquel supuesto, y en caso contrario, cuando haya de erigirse una sola provincia de dos o más, o viceversa, será necesario buscar el acuerdo de una «Convención Constituyente» provincial ad hoc, con poder de alterar sus límites existentes.»

Esto dice el ilustrado doctor Morello, actualmente juez federal de la provincia de San Juan, si no me equivoco.

Sr. Moyano. — Es rector de la Universidad de Córdoba.

Sr. Baibiene. — Rector de la Universidad de Córdoba, en sus *Lecciones de Instrucción Cívica* que se enseñan en casi todos los colegios nacionales.

¿Y por qué, agregó yo, señor presidente, una Legislatura ha de violar de una manera flagrante y a sabiendas, la Constitución que la ha instituido, que le ha dado el ser, y no ha

de emplear los medios que ella misma le ofrece para concordar sus actos con las exigencias de la Constitución nacional?

¿Por qué no ha de emplear los medios aconsejados por el ilustrado doctor Morello?

Es, pues, indudable, señor presidente, que la Legislatura de Corrientes, aun cuando fuese, como he dicho antes, una Legislatura en la noble y elevada acepción de la palabra, aun cuando hubiera procedido con la plenitud de libertad de acción que le era necesaria, ha consumado un acto inconstitucional, violando flagrantemente la Constitución de la provincia, y sin necesidad, porque habría podido perfectamente, ante las exigencias del Poder Ejecutivo, haber observado que la Constitución local le prohibía, haciendo ante esas exigencias lo que era menester: ocurrir al pueblo por medio de la elección de convencionales para hacer frente a esas mismas exigencias.

Pasando ahora a considerar la cesión del punto de vista de la Constitución nacional y como aceptable para el Congreso de la Nación, después de la luminosa y brillante demostración que ha hecho mi honorable colega por Buenos Aires a este respecto, muy pocas palabras tendrá yo que agregar. Sin embargo, quiero yo también tocar ese punto.

Como ya lo he recordado, el artículo 13 de la Constitución nacional supone que podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola sin el consentimiento de la Legislatura interesada y del Congreso.

El inciso 27, del artículo 67, trata de la jurisdicción de la Nación en su territorio y demás lugares adquiridos por compra o cesión a las provincias para establecer fortalezas, arsenales, almacenes y otros establecimientos de utilidad nacional.

La determinación clara y precisa del objeto de estas prescripciones constitucionales, señor presidente, no deja la menor sombra de duda respecto de que la exigencia del Poder Ejecutivo y el acto de la Legislatura y del Congreso, no han sido previstos por la Constitución nacional; y, por consiguiente, no cae bajo la jurisdicción del Congreso ni de la Legislatura de la provincia.

No se trata aquí, señor presidente, de la cesión de un territorio para formar un nuevo Estado; no se trata tampoco con la cesión de Posadas, de hacer un solo Estado de dos provincias, ni se trata de la adquisición de lugares para establecimientos como los que enumera el inciso 14, del artículo 67, de la Constitución;

se trata, señor presidente, de cortar en carne viva de un Estado federal para acrecentar un territorio nacional.

Se trata, señor presidente, de mutilar a la Nación en uno de sus miembros normales y orgánicos, con funciones regulares en el mecanismo de nuestra vida institucional, para alimentar o acrecentar un miembro rudimentario e inorgánico, como es un territorio.

No está, pues, señor presidente, y lo repito, no está llamado el Congreso a pronunciarse sobre un punto previsto por la Constitución.

Bien; es verdad que a esto se contesta que el objeto es, y no puede ser otro, sino el de preparar la formación y organización de la provincia de Misiones; pero yo digo a esto, señor presidente: si este es el objeto que ha tenido el Poder Ejecutivo al iniciar las gestiones que ha hecho por sí solo ante el gobierno de Corrientes, obteniendo ya la medida trascendental de la cesión de una parte del territorio de aquel Estado, ¿por qué no ha venido antes al Congreso a someterle el pensamiento en sí mismo, que es de bastante trascendencia como para que no pueda proceder por sí, sin la anuencia y el sentimiento del Congreso?

Es que, señor presidente: ¿Es cuestión tan insignificante la de construir un pequeño Estado sobre la frontera de la República, allá adonde no conduce una vialidad fácil, caminos de ningún género; en un territorio poblado principalmente por extranjeros del Estado vecino?

No, señor presidente; este pensamiento que necesitaba toda la amplitud de discusión que su importancia requiere, no pudo ser consumado exclusivamente por el Poder Ejecutivo, sino que debió ser sometido antes al Congreso, que no puede obrar en su realización como simple instrumento, arrancándosele uno a uno, actos que conducen fatalmente a su realización.

Ya que se afirma que el propósito del Poder Ejecutivo es la reorganización de la provincia de Misiones, ¿por qué no versa la discusión sobre ese punto, que es el punto capital, el punto importante, el que afecta los intereses nacionales bajo todos respectos?

¿Por qué es la cesión de Posadas hecha furtiva y clandestinamente por la Legislatura de Corrientes, la que se trae a la consideración del Congreso para decirle además: esta cesión responde al propósito de la constitución de un nuevo Estado federal?

Si se trajera este asunto a la discusión, yo diría: no puede haber un pensamiento menos fundado, no puede haber un propósito que menos apoyo tenga en las altas consideraciones de una política elevada o de una administra-

ción de acierto. El territorio federal de Misiones con Posadas más o menos, no puede ser, ni será ni en un siglo, el asiento apto para un nuevo Estado federal.

Los jesuitas que eligieron aquel lugar como el más propicio para el desenvolvimiento de las industrias de aquellos tiempos, para la productibilidad del trabajo, que encontraron allí un edén donde se establecieron y tantos prodigios realizaron, nunca penetraron, y por más que las necesidades del desarrollo de sus colonias lo exigiese, nunca penetraron en los bosques del actual territorio federalizado, nunca lo abordaron, porque esos bosques son una barrera insuperable.

Allí no pueden radicarse más que grupos pequeños de población, que jamás han de pasar de cinco, seis o diez mil habitantes.

Yo señalaría además este inconveniente, señor presidente: un pequeño Estado federal sobre la frontera del Brasil, en un punto como aquel, lejos de la acción y de las palpitaciones de la política general del país, sería un pequeño Estado brasileño: las elecciones municipales, las elecciones de gobernador mismo, todos los fenómenos de la vida de aquel Estado, serían absorbidos, serían dominados por la acción de la población brasileña que está allí y que se halla fuertemente ligada en intereses con el país vecino.

Y una vez terminados los grandes ferrocarriles que se llaman estratégicos en el Brasil, y el comercio y el movimiento de todo género, que eso va a atraer, serán otros tantos elementos poderosos de absorción.

Entretanto, señor presidente, se habría roto la unidad de un Estado que en sí mismo es poderoso, por la homogeneidad de sus elementos, por sus tradiciones gloriosas que lo presentan actuando siempre en la evolución argentina, por la independencia y por la libertad como un solo hombre, como un solo pensamiento, como una sola acción.

Pero no se trata de eso, señor presidente, el Poder Ejecutivo no ha sometido al Congreso la discusión de este propósito tan grave y tan serio, que se indica incidentalmente en el debate de uno de los detalles que se confiesa que conducen a su realización.

Voy a ocupar, señor presidente, la atención del Honorable Senado por muy pocos momentos más, haciéndole conocer cuánto mal haría a la provincia de Corrientes, y por consiguiente a la Nación misma, la aceptación o, mejor dicho, la segregación de la villa de Posadas a su territorio y la anexión al de Misiones.

Posadas está, señor presidente, ubicada en un punto que puede decirse, el punto único de tránsito y de comunicación de la parte más importante de la provincia de Corrientes, donde se asienta su capital y las principales de sus poblaciones con la parte occidental que se extiende sobre la orilla del Uruguay.

Federalizado ese punto, ese pedazo de territorio que se extiende entre la laguna Iberá y el Paraná, el gobierno de Corrientes no podría hacer su administración; no podría mandar un correo, no podría comunicar un decreto convocando a los pueblos a elecciones, sin pedir permiso al jefe militar que fuera el gobernador de Misiones.

En estas condiciones vendría a dejar colocada a la provincia para su desenvolvimiento natural, para la gestión de sus negocios diarios esta mutilación verdadera que se proyecta.

Y yo digo, señor presidente, ¿por qué se trata de hacer esto con la provincia de Corrientes?

¿De qué manera se compensa este mal positivo que recibe ella, perdiendo además una población llena de movimiento y de vida, que le produce anualmente 14 a 15.000 pesos de renta, si no son más, porque me refiero al año 1879?

¿Por qué se proyecta esto, señor presidente, respecto de la provincia de Corrientes que no ha recibido aún beneficio alguno de la nacionalidad, para quien las obligaciones respectivas establecidas en la Constitución nacional no se han creído subsistentes, en donde no hay un puente, donde no hay una piedra sobre otra que pueda acusar la acción del gobierno de la Nación?

¿Por qué se hace esto, señor presidente, con esa provincia, y tan luego, en momentos en que se puede decir que todas, extendiendo la vista en todas direcciones se han acrecentado y han dilatado sus territorios inmensamente. Cuando mirando a Córdoba se puede decir al que fué su gobernador: si han hecho una administración tan espléndida como aquella de que te jactas o engrías con razón o sin ella, es debido a los esfuerzos, a los sacrificios de la Nación hechos durante largos años para liberar tus magníficos territorios del Sur y ponerlos bajo tu dominio.

Cuando mirando a San Luis, a Santa Fe, a Buenos Aires y a todas partes, se encuentran la sangre y los sacrificios de la Nación entera, incluso naturalmente los sacrificios de Corrientes, liberando territorios que ensanchan los Estados y acrecientan su riqueza.

En estos momentos, señor presidente, cuando los ferrocarriles se extienden por todas partes; cuando los millones se gastan y las fortunas y el patrimonio de las generaciones venideras se hipoteca para construir esas obras, de las cuales una sola no alcanza a aquella provincia, ¿se ha de venir pensando todos los días en cercenarle una parte de territorio?

Pero si quiera, ¡por Dios!, téngase la templanza de los gatos de Samaniego. Cómanse lo que hay en el asador, pero dejen si quiera la tierra, dejen el asador.

Yo no sé, señor presidente, a qué plan de política trascendental responde el acto que se quiere llevar a cabo, desde que hemos visto que la reconstrucción de la provincia de Misiones sería un desgraciado pensamiento.

No sé a qué plan de política trascendental responde esta mutilación de la provincia de Corrientes, no sé a qué movimiento de nuestro desarrollo natural se liga, no puedo ver qué grandes intereses de la provincia o del porvenir están vinculados a este hecho.

Yo veo a un comandante, a un gobernador de un territorio, de cuya mayor parte es propietario él mismo, pidiendo que se quite a la provincia de corrientes un precioso jirón de su suelo, de su población y de su riqueza, para anexarlo a aquél que ya es un condado suyo, un dominio propio, en donde es imposible hacer ni hasta que se establezca y desarrolle una población, porque todo está enajenado en manos de especuladores.

No veo, señor presidente, nada grande nada elevado en todo esto; veo sí, una operación, empírica, sin alcance de ningún género, aplicada a la satisfacción de intereses mezquinos e inconfesables. No veo nada más; y sentiría que el Senado de la Nación prestara acuerdo a este pensamiento, tal como lo he calificado, no siendo otro, y no pudiendo, por respeto a él mismo, dar mayores explicaciones al respecto.

Sr. Ministro del Interior. — Pido la palabra. Señor presidente: he asistido a este debate por haber recibido una indicación de la Secretaría del Senado, haciéndome saber que, en la primera sesión en que se había tratado este negocio, se había pedido la concurrencia del ministro del interior. Sin esto, es probable que no hubiera ocurrido, porque, lo declaro francamente, me ha sorprendido el giro, la extensión y la trascendencia que se ha dado a esta cuestión.

No creía haber sometido el Poder Ejecutivo al Congreso un acto de alta administración, ni mucho menos una grave cuestión de política.

Puedo haber estado equivocado, pero me parecía que era más limitada la importancia de este asunto. La extensión que ha tomado este debate, el giro que se le ha dado, demuestran que yo probablemente habré estado en un error; pero habrá sido siempre un error perfectamente sincero y bien intencionado.

Un asunto que debía ser resuelto en definitiva por el Congreso de la Nación, donde está representada la opinión de los pueblos, el sentimiento nacional, si no es que hemos de dudar de la legitimidad con que están todos sentados aquí; un asunto que debía ser resuelto, como he dicho, por la deliberación tranquila de las dos Cámaras que componen el Congreso, no podía nunca llevar en sí, pensamientos de política suspicaz ni veleidades enubiertas.

La discusión debía ser libre, como efectivamente ha venido a serlo, debía pasar por el crisol de todas las opiniones, y el Poder Ejecutivo no podía esperar que después de debates como los que tienen lugar en nuestro Parlamento, se sancionase un pensamiento que no fuera conveniente y práctico.

Siento que el señor senador que dejó la palabra, y a quien tengo principalmente que contestar, no esté en este momento presente, no porque trate de hacer reproche alguno a sus opiniones, que no me toca juzgar, sino porque hubiera podido apereibirse de la razón que tengo para poner en duda algunas de las explicaciones que ha dado.

El señor senador ha empezado su exposición estableciendo lo que ha llamado los antecedentes de la cuestión.

Declaro que, en la parte que conozco, en la parte de que puedo juzgar, no los ha expuesto con exactitud. Los informes que tiene son completamente equivocados, o los recuerdos de su memoria no son fieles.

El señor senador ha empezado increpando al Poder Ejecutivo el hecho de haber «exigido» al gobierno de Corrientes la cesión de la villa de Posadas, y dos veces ha pronunciado con acento notable estas palabras: «la exigencia del gobierno nacional.»

No, señor presidente; si los documentos oficiales dicen realmente lo que está escrito en ellos, nadie ha exigido al gobierno de Corrientes la cesión de la villa de Posadas. Se le ha dirigido simplemente una nota, adjuntándole el memorándum elevado por el gobernador de Misiones, en que representaba la conveniencia que habría para la provincia de Corrientes y para la Nación en constituir la villa de Posadas en capital del territorio de Misiones; y,

como hay mucha diferencia entre comunicar un informe que se recibe, entre insinuar una medida de administración, y exigirla, me ha de permitir el Senado que lea la nota dirigida al gobernador de Corrientes, que felizmente no es muy extensa.

Dice así:

Ministerio del Interior

«Al señor gobernador de Corrientes.»

«Este ministerio ha recibido del gobernador de Misiones la nota que en copia tengo el honor de acompañar a vuestra señoría.

«En ella manifiesta la conveniencia que habría de establecer la capital de aquel territorio en el pueblo de Posadas, con los límites reducidos que señala, y exponer diversas consideraciones, tendientes a demostrar que esa incorporación al territorio federal favorecería eficazmente la buena administración de éste y su desarrollo, sin detrimento de los intereses de esa provincia.

«El Poder Ejecutivo nacional, atendiendo a todo lo expuesto por el gobernador de Misiones y confiando en el patriotismo del pueblo y gobierno de Corrientes, ha resuelto poner en conocimiento de vuestra señoría la nota de aquel funcionario.

«Si los poderes públicos de esa provincia, después de tomarla en consideración, se dispone a hacer la cesión indicada, el Poder Ejecutivo solicitará del Honorable Congreso lo que corresponda para la anexión del pueblo de Posadas, con los límites que se establezcan al territorio federal.»

Yo me permito, pues, resistir la palabra «exigencia», y decir que no ha podido ser más desinteresada, ni más descolorida la comunicación dirigida por el gobierno nacional.

Repito, pues, señor, lo que antes dije, cuando el señor senador no se encontraba en la sala: me ha de permitir que, en vista de estos antecedentes, ponga yo en duda y resista muchos de los hechos que él ha relacionado.

No creo que ha sido testigo presencial de ellos, y por consiguiente no puede interpretar mis palabras como una falta de consideración a la rectitud de su carácter.

Sr. Baibiene. — ¿Me permite una pregunta? ¿Por qué no cree que haya yo sido testigo presencial?

Sr. Ministro del Interior. — Porque no sabía que hubiera estado presente.

Sr. Baibiene. — Porque sabe que no puedo ir allí, sin peligro de mi vida.

Sr. Ministro del Interior. — Señor presidente: yo voy a hacer una excepción a mi costumbre. Y, generalmente no interrumpo y nunca...

Sr. Baibiene. — Pedí permiso.

Sr. Ministro del Interior. — No me opongo a que me interrumpan; sin embargo, como este debate tiene algo de especial, no desearía, bajo la impresión de interrupciones, pronunciar una palabra que no respondiera a mi pensamiento. Agradecería por esto a los señores senadores que no me interrumpiesen, como yo lo he hecho con ellos.

Decía, pues, señor presidente: el señor senador me ha de dispensar que ponga en duda muchos de los hechos que él ha relacionado, porque creo que no ha estado presente en el teatro de los sucesos, de manera que no debe tomar esto como un desconocimiento de la rectitud de su carácter.

No es extraño que él tenga informes inexactos. Todos sabemos, señor presidente, lo que son las pasiones políticas, todos sabemos la vehemencia, la exageración con que se pronuncian, con que se expiden los hombres que actúan en el teatro de los sucesos políticos ¿qué extraño es, pues, que el señor senador haya recibido informes exagerados, que le hayan transmitido reseñas equívocas.

Así, pues, yo que no he estado en el teatro de los sucesos, que no tengo esos medios de información a que el señor senador se ha referido, persisto en poner en duda todo aquello que él no ha visto personalmente, todo aquello de lo que no está instruido, como se dice generalmente, por ciencia propia. Y lo pongo tanto más en duda, cuanto que, como acabo de demostrarlo, empezando por el documento fundamental de este negocio, el señor senador estaba mal informado; creía que el gobierno nacional había hecho una exigencia, y la exigencia no se encuentra en la nota que acabo de leer, ni nada que se parezca a ella.

El señor senador ha entrado, en su exposición, en un terreno en que yo no desearía seguirlo. El ha calificado la situación de Corrientes en términos que el patriotismo me aconseja resistir.

El señor senador ha dicho que allí no hay legislatura, que aquello es un oprobio en el orden constitucional de nuestro país.

Yo no acepto esas palabras, no las acepto para ninguna de las provincias que hoy componen la República.

Y me ha de permitir el señor senador una observación. Yo no encuentro lógica su actitud

con las palabras que ha pronunciado. El tiene asiento en el Congreso argentino, él tiene asiento en un Parlamento en que la libertad es amplia, como lo estamos viendo todos los días, como lo acabamos de presenciar en este momento: la palabra del señor senador se ha manifestado franca y desvueltita, no teniendo de todos sus colegas sino testimonios de consideración. ¿Por qué no ha reclamado, en tanto tiempo, que cesase ese oprobio en la provincia de su nacimiento? ¿por qué no ha solicitado, en dos años que van corridos, las medidas necesarias para reconducirla a la senda constitucional?

No me explico señor presidente, el silencio del señor senador, ni lo puedo conciliar absolutamente con el juicio que acaba de emitir respecto de la provincia que representa.

Después de estas observaciones, entraré a hacerme cargo de la forma en que el señor senador ha tomado la cuestión.

Me parece que podría condensar su argumentación en estos términos: Por la Constitución de Corrientes — dice — la provincia no tiene la facultad de ceder parte alguna de su territorio: la cesión que ha hecho, aun suponiendo que emanase de un poder legítimo, es decir, de una legislatura legal, no podría ser tomada en consideración ni autorizada por el Congreso. Me parece que esta era la base de su argumentación.

La cuestión ha sido tratada bajo diversas fases: bajo la fase constitucional, bajo la fase de las conveniencias nacionales, y se ha también ligado con la política interior del país.

Voy, pues, a presentar mis observaciones, también desde estos tres puntos de vista.

He notado, señor presidente, que la discusión en gran parte ha versado a la luz, puedo decir, de la Constitución y de las prácticas americanas. Es en esta parte donde considero que se han dividido más las opiniones, y que se ha acentuado la argumentación de los señores que impugnan el proyecto.

La Constitución argentina, han dicho, no permite hacer cesiones para incorporar nuevos territorios a los de la Nación, y han estudiado el artículo constitucional comparándolo con los principios y con la interpretación que se ha dado en Estados Unidos a disposiciones análogas.

Haré también mis observaciones en el mismo sentido.

Empiezo por establecer que entre la Constitución argentina y la Constitución americana, hay diferencias importantes en esta cuestión: empiezo por hacer notar, aunque no sea una novedad para los señores senadores, que el pun-

to de partida de la organización argentina, y deduciré, como consecuencia de estas dos proposiciones, que, siempre que tratemos de interpretar artículos constitucionales, tenemos que inspirarnos en diversas fuentes: los norteamericanos tendrán que inspirarse en la preponderancia de la soberanía local; nosotros, al contrario, tendremos que inspirarnos en la preponderancia de la soberanía nacional.

He dicho que la Constitución argentina es diversa de la Constitución americana, porque la nuestra registra esta facultad del Congreso: «fijar los límites de las provincias», facultad que no tiene el Congreso de la Unión. Los Estados entraron a la Confederación con toda su capacidad política, con la integridad de sus territorios, con los límites que ellos se habían dado, mientras que las provincias no vinieron a la Nación, sino que aparecieron desde el primer momento como parte integrante de la Nación, confiando a esta la facultad de fijar los límites de ellas.

De aquí, pues, es que deduzco la conclusión que he establecido: nuestro criterio de interpretación es distinto del norteamericano. Tenemos siempre que propender, porque es lo conforme con nuestros antecedentes históricos, con nuestras tradiciones, y con el voto de los pueblos, a que todo caso de duda, todo caso de conflicto y de obscuridad, se resuelva atendiendo preferentemente a la soberanía nacional.

Señor presidente: Babbie ha dicho en su interesante tratado de derecho Constitucional, que entre los Estados federativos y la Federación de Estados hay una notable diferencia, y explica su proposición en esta forma: La federación es propiamente una alianza de estados; estados independientes, estados soberanos, que se unen para crear una autoridad nacional. Esta autoridad tiene más o menos atribuciones, más o menos importancia; según las conveniencias, según las necesidades de los pueblos que se confederan.

Un estado federativo, a mi juicio, es muy distinto: es una nación que adopta una forma descentralizada de gobierno; y entonces, como he indicado, la nación desprende ciertas facultades para depositarlas en las soberanías locales, pero queda siempre preponderante el sentimiento, la autoridad y el prestigio nacional.

Los Estados Unidos todos sabemos que eran colonias separadas, independientes y sin vínculos entre sí; todas dependían únicamente de la Corona. Cuando se ligaron, se crearon un gobierno, que propiamente podemos llamar artifi-

cial, aun cuando fuera la obra de la previsión y del patriotismo: delegaron en él las facultades precisas, indispensables para el mantenimiento de la seguridad de los intereses generales de la Unión; pero se reservan muchas facultades, y entre ellas la de fijar los límites de los Estados: no quisieron consentir que la Unión tuviera facultad alguna para fijar límites a los territorios de los Estados, porque pretendían al incorporarse a la federación, que todos ellos eran dueños de los territorios; y efectivamente así se mantuvieron en los primeros años de aquella organización.

Entre nosotros, como decía, todo es diverso a este respecto. Las provincias nunca han pretendido ser soberanas e independientes, como lo pretendieron y lo consignaron los Estados Unidos al confederarse.

Las provincias han formado siempre parte de la Nación: asomaron con ella a la vida de la libertad el año 10; se mantuvieron unidas en el Congreso nacional hasta el año 26, cuando la presidencia del señor Rivadavia. Más tarde en la Convención de Santa Fe; más tarde en el Congreso del año 53; y consecuentemente con estos antecedentes, cuando entraron a sancionar definitivamente su Constitución, entregaron al poder nacional la facultad de fijar los límites de sus territorios, sin condiciones de ninguna clase, es decir, depositaron en el Congreso una autoridad suprema a este respecto que él puede ejercer amplia y desenvueltamente.

Es por esto que se estableció en el artículo 14 lo siguiente: «Atribuciones del Congreso...

«Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación; fijar los de las provincias.»

Se ve que emplea dos verbos distintos.

«Arreglar definitivamente los límites del territorio nacional» y fijar los límites de las provincias; ¿por qué? Porque ese arreglo tiene que ser obra de la discusión con los Estados colindantes, pues no es una atribución que va a ejercer el Congreso por sí solo.

«Fijar los límites de las provincias.» Esta es la alta autoridad que le ha conferido la Constitución.

No quiere decir esto, señor presidente, que el Congreso, al usar de esta atribución, puede proceder insensatamente y decir: fijo los límites de las provincias donde quisiere, porque no puede ni remotamente suponerse, como no puede ni en hipótesis admitirse de ningún acto que va a ser sancionado por el Congreso argentino, compuesto de dos cámaras cuyos miembros tienen todas las condiciones establecidas

por la Constitución, y que son, hasta donde es posible en las cosas humanas, una garantía de su patriotismo.

Pero si bien el Congreso no podría, como he dicho, proceder insensatamente fijando los límites de las provincias donde quisiere, por que esto no puede aceptarse ni en hipótesis, quiere decir que al desempeñar esta alta función que la Constitución le confiere, debe esenchar los consejos de la justicia; pero tiene también que armonizarlos con otras consideraciones altas y poderosas, que son las consideraciones políticas, las consideraciones de la conveniencia nacional; y entonces el Congreso, al «fijar los límites de las provincias», facultad en la que nadie le ha puesto ni puede ponerle condiciones, tiene que proceder bajo las consideraciones que acabo de indicar: la equidad, la justicia, y las conveniencias políticas del país.

Cuando los Estados americanos se confederaron, todos ellos eran dueños de los territorios; no había territorios abandonados, separados, que pudiera ocupar el gobierno de la Unión. Promoviéndose al poco tiempo una discusión sobre la conveniencia de que los Estados cedieran a la Unión esos territorios despoblados en su mayor parte. La discusión fué muy sostenida; los debates fueron interesantes, y los Estados concluyeron por ceder efectivamente a la Unión todos los territorios despoblados que estaban dentro de sus límites respectivos y sobre los que no habían querido conferir facultad de ninguna clase al primer Congreso americano; y procedieron, sin duda, con patriotismo y previsión en aquella resolución, por que los hechos han venido a demostrar que la Unión Americana no se habría desenvuelto en la forma próspera y feliz en que la vemos, sino hubiera podido disponer en sus primeros años de estos territorios cedidos a la Unión, sin que hubiera cláusula que autorizara a los Estados para ceder ni al Congreso de la Confederación para aceptar. Más tarde, cuando vinieron a sancionar la Constitución, se ocuparon de esta cuestión, y entonces fué preciso establecer en ella un artículo que no solamente legalizase las incorporaciones anteriores, sino que las permitiera para lo futuro; y hago notar esta circunstancia, porque yo tengo siempre presente un hecho que ocurre con frecuencia entre nosotros.

Con justa razón estudiamos la jurisprudencia y las prácticas americanas y las seguimos generalmente; pero en ciertos casos, aun cuando se está viendo que los americanos han resuelto sus dificultades con un tino práctico

admirable, sin envolverse en fórmulas que no tienen trascendencia ni importancia, nos apartamos de ellas. Así, en aquella nación, como acabo de indicar, cedieron los Estados, sin tener autorización para ceder, y aceptó la Unión sin tener autorización para aceptar. Pero vieron los legisladores, los constituyentes del 87, que era conveniente aquel acto, vieron que era de grandes esperanzas para el engrandecimiento de la Nación, y se apresuraron, no sólo a sancionar lo que habían hecho antes, sino también a establecer la regularidad con que podría procederse en forma análoga en lo futuro.

Ocurrió otro hecho en que no se ciñeron los americanos a las palabras del artículo constitucional. Vino la adquisición de Louisiana, y entonces se puso en cuestión el derecho que había tenido el gobierno de Estados Unidos para adquirirla por medio de compensaciones pecuniarias.

La discusión fué muy interesante. Tomaron parte en ella los más notables constitucionalistas: Jefferson mismo escribió una notable carta a este respecto y sostenía que no había podido hacerse la adquisición de aquel vasto territorio por compra a Francia, porque los Estados Unidos se habían formado únicamente para gobernar el territorio que los constituía en la época de su organización, y que no les era dado adquirir por compra territorios extranjeros; pero después de aquellos grandes debates, ¿cuál fué el resultado? Se aprobó en el Congreso el tratado celebrado, adquiriendo aquel vasto territorio por medio de compensaciones pecuniarias acordadas al gobierno de Francia, y no solamente recibió aquel acto la aprobación también, o más bien dicho, la consagración, por una sentencia de la Corte Suprema de la Nación, pues habiendo sido llevado ante ella un caso, que se había suscitado en uno de los territorios adquiridos de Francia, la corte declaró que el gobierno había podido realmente adquirir el territorio por compra, porque esta era una consecuencia de la facultad de hacer tratados.

Así, pues, aquel hecho que no estaba previsto en la Constitución americana, aquel hecho contra cuya regularidad protestaron constitucionalistas importantes, quedó, sin embargo, sancionado, como acabo de referirlo, por la aprobación del Congreso y por la sentencia de la Suprema Corte de la Nación.

Sr. Presidente. — Si el señor ministro necesita un momento de descanso, pasaremos a cuarto intermedio.

Sr. Ministro del Interior. — Por mí, no; pero si el señor presidente lo desea, podemos hacerlo.

—Se pasa a cuarto intermedio.

—Vuelto a sus asientos poco después los señores senadores, continúa con la palabra el:

Sr. Ministro del Interior. — Señor presidente: las opiniones que acabo de tener el honor de exponer a la Cámara, no son sugeridas por la necesidad en que me encuentro de sostener el proyecto del Poder Ejecutivo; no son opiniones improvisadas, no, señor: corren hace 20 años en un folleto que escribí en una discusión sostenida con mi distinguido amigo el doctor Ugarte. Ese folleto circuló profusamente en la República y tuve la satisfacción de que fuera también reproducido, sin solicitarlo yo, en diarios que eran órganos de un partido político, a que no he pertenecido ni pertenezco. Y traigo este recuerdo, para abonar, diré así, la sinceridad de mis opiniones. No son efectos de la posición en que me encuentro, ni de la necesidad en que me hallo de sostener este proyecto: están escritas en los mismos términos con las mismas palabras, y quizá con otras mucho más amplias de las que he expresado en esta sesión.

Después de esta digresión, continuaré: si en Estados Unidos, cuyo procedimiento acabo de recordar, cuyo artículo constitucional tenemos presente, si allí ha sido permitida y autorizada la cesión de territorios que han hecho los Estados para incorporarlos a la Unión, ¿en virtud de qué podemos nosotros sentir dificultad alguna para reconocer el mismo principio?

Se ha originado una disidencia entre el señor senador por Buenos Aires y el señor senador por San Juan, sobre un punto importante. Están ambos de acuerdo en que en Norte América los Estados han cedido territorios para incorporarlos a la Unión. Sobre esto no ha existido dificultad. La dificultad entre ellos ha versado sobre otro punto: si los territorios cedidos tenían o no población. Sobre este punto yo no creo que debo molestar al Senado, porque aun cuando entrara a tratarlo, no podría sobrepasar la claridad con que ha presentado la cuestión el señor senador por San Juan. El ha hecho la relación de los territorios cedidos por los Estados a la Unión, y ha especificado también cuáles de esos territorios fueron cedidos con una base más o menos importante de población. Por consiguiente, estando pen-

diente esta afirmación que ha hecho el señor senador por San Juan, me creo exonerado de insistir en ella, y debo simplemente adherirme a su opinión y ratificarla.

Después de los precedentes que he recordado, establezco la conclusión que me parece lógica: si en Estados Unidos han podido cederse territorios poblados y despoblados a la Unión, en la República Argentina, la cesión es mucho más lícita y natural, porque el artículo de la Constitución a este respecto es más amplio que el que existe en la de Estados Unidos, y porque los precedentes son diversos, como creo haberlo demostrado.

Paso a estudiar el artículo que rige la cuestión.

El artículo 13 admite — y todos me parece que lo entendemos así — que las provincias pueden ceder territorios para la creación de nuevas provincias. La cuestión, pues, se reduce a averiguar si tienen también la facultad de hacer estas cesiones, para incorporar la parte cedida, a los territorios nacionales.

A mi juicio, no hay ninguna dificultad.

El señor senador por Corrientes ha establecido su principal argumento en la siguiente forma: «la Constitución de Corrientes ha señalado los límites de aquella provincia, y por consiguiente, no puedo hacer cesión alguna, dentro de los límites establecidos», y me parece que en esto padece una equivocación.

El señor senador por San Juan observó en la sesión anterior, a mi juicio con perfecta razón, que esta disposición de la Constitución de Corrientes no podía absolutamente oponerse en este caso, desde que existe la prescripción clara de la Constitución nacional permitiendo y autorizando actos de esta naturaleza.

Agregaré otra observación: el hecho de establecer un Estado en su Constitución los límites de su territorio, nunca se ha entendido que importe que los poderes públicos de ese Estado no puedan hacer la segregación de alguna de las partes contenidas dentro de los límites señalados; no, señor. El establecimiento de los límites en la Constitución no importa el establecimiento de un derecho irrevocable, que nadie pueda tocar: al contrario, y tomo por ejemplo lo que sucede en todas las naciones. Hay muchas que tienen establecidos sus límites en la Constitución, y ¿les priva esto del derecho de hacer tratados internacionales, en los cuales cedan tal o cual parte de su territorio? ¿Se ha creído necesario que se convoquen convenciones constituyentes para resolver este punto? Yo no tengo absolutamente idea de que tal trámite haya sido requerido en los tratados internacio-

nales. Cuando se estipula alguna obligación que afecte la integridad del territorio, sus límites, aunque estén fijados en la Constitución, se considera, sin embargo, que sometiendo los tratados a la revisión de los poderes que por la Constitución deben entender en ellos, éstos están autorizados para ratificarlos, ratificación que necesariamente arrastra el desprendimiento de una parte más o menos importante de territorio, y creo que no podemos dar otra inteligencia al artículo de la Constitución de Corrientes.

No es solamente en la federación norteamericana donde podemos buscar, en estos casos, consejo para resolver esta cuestión.

En 1876 se constituyó la Confederación de los Estados Unidos de Colombia.

Todos y cada uno de los Estados que forman aquella Confederación, fueron mencionados en el artículo 2º de la Constitución, estableciéndose también clara y terminantemente los límites con que cada uno de esos Estados se incorporaba en la Confederación, de modo que puede decirse que los límites de los Estados de Colombia han recibido una sanción constitucional.

Pues bien; por esa misma Constitución pueden desprenderse de los Estados, territorios para formar nuevos Estados, sin que se necesite la convocación de una Convención Constituyente. Lo que se requiere en esos casos es, simplemente, el consentimiento del Estado del cual se desprende el territorio y la aprobación del Congreso, por mayoría absoluta en las dos Cámaras, y si el Estado ha resistido, por dos tercios de votos. La Convención Constituyente, repito, no es allí requerida, y los límites de los Estados están consignados en un artículo constitucional.

Es idéntico o muy análogo el caso de Méjico. Los Estados mejicanos se confederaron, y también establecieron las partes integrantes de la Confederación y los límites con que cada uno de los Estados entraba al gobierno general, y también, como en el caso de Colombia, se fijaron en la Constitución los límites de cada provincia. Allí existe, sin embargo, la facultad de desprender de los Estados, territorios para formar otros nuevos, sin necesidad de convocar una Convención Constituyente, y bastando la simple mayoría del Congreso cuando el Estado afectado consiente, o los dos tercios de votos, cuando no lo consiente.

Estas consideraciones y estos ejemplos, me parece que son bastantes para demostrar que la provincia de Corrientes, aun cuando la Constitución haya establecido sus límites, ha estado

perfectamente habilitada para hacer la cesión de la villa de Posadas.

Se ha creído ver en esto una doctrina, un precedente peligroso: se ha creído ver una medida que autoriza a los poderes nacionales a debilitar las provincias y a producir trastornos políticos de funesta trascendencia para el país.

Debo decir, respetando a los señores que han emitido estos temores, que a mi juicio carecen completamente de fundamento. Fijémonos en el procedimiento que debe seguirse y tengámoslo presente, para considerar el que se ha observado en la cesión de la villa de Posadas.

Para que tenga lugar la segregación o el desprendimiento de un territorio, es necesaria la conformidad de la Legislatura, la conformidad del gobierno de la provincia a que el territorio pertenece, porque si él se opusiera, entonces la Legislatura, para hacer la cesión, necesitaría dos tercios de votos, puesto que es la doctrina establecida en todas las constituciones; es necesaria la aprobación de ambas Cámaras del Congreso y la del Poder Ejecutivo nacional; y si éste observare la sanción del Congreso, para hacerla prevalecer, se necesitarían otros dos tercios de votos.

Tenemos entonces que para que se verifique la segregación de un departamento como el de Posadas, es necesaria la conformidad de todos los poderes provinciales y de todos los poderes nacionales; y yo pregunto, señor presidente: cuando pueda producirse esa combinación, cuando puedan realmente presentarse armonizados todos los poderes provinciales y todos los poderes nacionales, ¿será para realizar un hecho que pueda traer perjuicios a alguna provincia, que pueda producir otra cosa que beneficios para la Nación? ¿Qué mal puede resultar de una evolución tan complicada y tan pacientemente elaborada como tiene que ser ésta?

Si se reconoce que las provincias pueden ceder para fortalezas, para arsenales, para establecimientos nacionales, pregunto, señor presidente: ¿no habrá casos en que sea más importante, en que se consulten mejor las conveniencias políticas, las conveniencias nacionales, como por ejemplo la cesión de un reducido departamento para que sirva de base a la organización y a la población de un territorio, para una fortaleza, un arsenal, un establecimiento nacional, porque no estando todos calificados no sabemos la extensión que pueden abarcar?

A mí me parece fuera de duda.

No podemos, al menos procediendo discretamente, sentar doctrinas absolutas a este respecto. Todo depende de las circunstancias. Puede ser que por punto general sea más conveniente ceder el territorio para la creación de una provincia, que cederlo para vigorizar y fomentar un territorio nacional; pero yo no admito la opinión en absoluto, porque, repito, todo esto depende de las circunstancias de cada caso, según el territorio de que se trata, su situación geográfica, los servicios que pueda estar llamado a prestar en las eventualidades del porvenir, y puede ser de mucha mayor importancia fomentar un territorio nacional que crear una provincia alejada y quizá careciendo de medios rápidos de progreso.

Se ha hecho otra observación. Se ha dicho: la Nación podría propender por este medio a debilitar y a arruinar las provincias.

Y ¿qué interés podría aconsejar se procediera de este modo? ¿No está la Nación representada en el Congreso, al que tenemos que respetar como expresión de la opinión pública del país? ¿Qué intereses antagónicos son estos que existen entre las provincias y la Nación?

La Nación entre nosotros no es más que la prosperidad, el engrandecimiento y la organización de las provincias. Provincias y Nación, todo es una misma cosa: de la prosperidad de las unas depende la prosperidad de las otras; del crédito de la Nación depende el crédito de las provincias.

¿Qué intereses antagónicos podrían llevar a los poderes nacionales a solicitar esta segregación sin otro propósito que el de perjudicar a determinadas provincias?

Absolutamente ninguno.

Los poderes nacionales, cuando se hacen sentir, es para contribuir eficazmente, no sólo dentro de los límites señalados en la Constitución, sino aun fuera de ellos, a la organización, a la mejora, a la prosperidad de las provincias, estimulando los ferrocarriles, las obras públicas, y todo aquello que puede conducir al bienestar de ellas, y no puedo admitir que los poderes nacionales pudieran ponerse de acuerdo con los poderes provinciales, para verificar un acto en perjuicio de determinadas provincias.

Esto, ni en hipótesis lo admito.

A mí me sorprende, señor presidente, que tratándose de la segregación de un departamento reducido, se considere que no están bien garantizados los intereses de la provincia de que forma parte después de haber expresado su

voluntad los poderes provinciales, y de haber recibido la autorización de los altos poderes de la Nación.

A mí me sorprende que tratándose de la segregación de territorios reducidos, se diga que no están bien garantizados los intereses de las provincias de que forman parte, cuando después de haber prestado su asentimiento los poderes públicos provinciales, viene todavía a recibir la autorización de los altos poderes de la Nación; me sorprende porque veo que todos los derechos, que todas las garantías, que todos los grandes intereses de las provincias, están colocados bajo la protección de los poderes nacionales.

¿Quiénes son los que, por nuestra Constitución, garantizan el libre juego, la integridad y el mantenimiento de las instituciones provinciales en casos de conflicto, de perturbación y de trastornos internos? Son los poderes nacionales a los que aquellas ocurren solicitando la intervención para que se restablezca el orden constitucional.

¿Cuál es el alto poder encargado de dirimir las cuestiones y las controversias de las provincias, evitando que ellas apelen a sus recursos propios para resolverlas?

Es la Suprema Corte de la Nación. Es allí donde todas ocurren, porque ese poder está levantado para servir de eficaz garantía al ejercicio de todos los intereses y de todos los derechos.

Así, cuando veo que todos estos intereses se ponen bajo la protección de los poderes nacionales, no puedo admitir que cuando se trata de la segregación de villas y de departamentos, se desconfíe del acierto, de la elevación y de la mediación con que esos poderes procederán.

Señor presidente: el señor senador por Corrientes ha hecho una observación que no quiero dejar que pase incontestada. El ha inculcado, ha censurado el procedimiento del gobierno nacional, y ha dicho: ¿en virtud de qué se ha dirigido primero al gobierno de Corrientes? ¿Por qué no ha venido antes que todo, como correspondía, al Congreso nacional de la villa de Posadas?

Declaro que no esperaba el argumento y que me ha sorprendido; pero he meditado un momento sobre él y debo decir que no le encuentro razón de ninguna clase.

¿Qué artículo constitucional, qué ley prescribe este procedimiento? Absolutamente ninguna. Los más grandes negocios, los negocios de mayor importancia y de mayor trascendencia, si están dentro de la acción administrativa, el

Poder Ejecutivo los gestiona y los presenta después a la aprobación del Congreso.

¿Daríamos más importancia a la cesión de la villa de Posadas, que a la celebración de un tratado internacional que pueden arrastrar obligaciones, estipulaciones gravísimas para la República, que quizá podrían comprometer su paz y su bienestar en el futuro? Y sin embargo, el Poder Ejecutivo los celebra, y el Poder Ejecutivo viene y los presenta al Congreso y solicita su aprobación.

No sé, pues, por qué podríamos colocar este procedimiento fuera de todos los precedentes que tienen actos de la naturaleza de los que he recordado.

Se ha dicho, señor presidente, en esta sesión, que arrebataríamos por este proyecto a los habitantes de Posadas sus derechos políticos. Me parece que la expresión es exagerada. Los habitantes de un territorio nacional no quedan despojados de sus derechos políticos; están bajo todas las garantías, bajo todas las disposiciones de la Constitución nacional y bajo la legislación del Congreso y, por consiguiente, tienen todas las garantías necesarias para la seguridad de su propiedad, para la libertad de su palabra, para la libertad de su conciencia, para todo lo que más importa al hombre en sociedad.

Se refiere probablemente este argumento a la falta de participación en que quedarían para la elección de diputado y de presidente. Yo digo que esto no podría ser sino muy transitorio, porque, como ha hecho sentir con toda propiedad el señor senador por San Juan, un territorio nacional está forzosamente llamado a convertirse en provincia tan pronto como tenga la población y los elementos necesarios para mantener su orden interno con arreglo a las prescripciones de nuestra Constitución.

Así, pues, si el territorio de Posadas tiene la importancia que se dice, adherido al territorio de Misiones, se convertirá pronto en una provincia, y los habitantes de ella antes de tres o cuatro años, y quizás todavía en menos tiempo, estarán en ejercicio aun de esos derechos a que se ha referido uno de los señores senadores, no sé si el señor senador por Buenos Aires o el señor senador por Corrientes; pero mientras tanto ellos quedarán gozando de todas las garantías y de toda la protección que dispensa la Constitución nacional.

Debo también hacer presente que está pendiente en el Honorable Congreso un proyecto sometido por el Poder Ejecutivo para la organización de los territorios nacionales, proyecto que está calificado en los sancionados en Estados Unidos y en el que se toman en consideración

todas estas circunstancias, y mientras llegan los territorios a adquirir las condiciones para ser convertidos en provincias, tienen su representación en el Congreso, aunque representación limitada, porque no tienen el derecho de votar.

Señor presidente: se ha hablado, en el curso de esta discusión, de la influencia arbitraria que el gobierno nacional ha desenvuelto para obtener este resultado. Yo me limitaré a contestar este argumento con una pregunta. ¿Qué combinaciones políticas, qué planes podrían fundarse en la anexión de un departamento modesto, con cinco o seis mil habitantes, y cuyas rentas probablemente no alcanzan a sufragar los gastos de su justicia de paz? Absolutamente ninguno.

Yo creo que se procedería con más justicia diciendo que padece una equivocación el Ejecutivo nacional; pero me parece que la justicia falta si se dice que esta segregación de la villa de Posadas responde a planes políticos, responde a combinaciones de preponderancia personal, ni a preponderancias políticas de ninguna clase.

No; es la convicción en que el Poder Ejecutivo ha estado de que es necesario, cuanto antes, aumentar el territorio de Misiones y convertirlo en una provincia rica, en una provincia próspera y floreciente.

Son razones de muy diverso orden las que deciden este juicio, señor presidente, y a ellas debe atribuirse exclusivamente el pensamiento que está sometido a la consideración del Congreso, pero nunca a planes de engrandecimiento, ni de ambición, ni de nada que se papeza, porque nada de esto se armoniza con las modestas y humildes condiciones del departamento o villa de que se trata.

Con motivo de esta discusión se han hecho diversos cargos al gobierno nacional. Se ha hablado de intronización en los negocios internos de las provincias, se ha hablado de gobiernos que se levantan o desaparecen, se han hecho censuras y formulado cargos que yo considero y aseguro que son completamente infundados. Yo no entraré a contestarlos detenidamente, seré breve en este punto, y deliberadamente seré laconico: primero, porque no entra en el orden de mis ideas, ni en las condiciones de mi carácter debates que enardecen; segundo, porque creo que a esos cargos está contestando la prosperidad, el orden, la riqueza del país que se desenvuelve en todas direcciones. Yo profeso, señor presidente, una doctrina, estaré tal vez equivocado; pero cuando veo un país que prospera, un país que progresa

sa, al que acude la inmigración extranjera, en que todo florece, digo: aquí hay seguridad, aquí hay libertad, porque la industria, el comercio, el crédito, la prosperidad, la inmigración no afluyen donde hay inseguridad, no afluyen donde hay despotismos.

Así, pues, presentando ese hecho como una anticipada contestación a los cargos que se han formulado, diré únicamente lo que sea muy indispensable para que conste que ni como ministro ni en ningún sentido los acepto.

Señor presidente: es preciso que seamos justos; todos descamos serlo y no dudo que al fin hemos de arribar a entendernos.

Estos cargos, estas acusaciones, no son nuevos, han resonado muchas veces en este Congreso.

¿Qué administración, qué gobierno se ha visto libre de ellos?

Yo recuerdo que se han formulado cargos mucho más acerbos contra el general Urquiza, contra el gobierno de la Confederación.

Presentábasele con los colores más denigrantes: todo era inseguridad, todo era oprobio, todo era vergüenza. Pero pasaron las agitaciones, se serenaron las pasiones, entramos en el camino de la reflexión, y ¿qué encontramos? Encontramos las provincias reunidas por primera vez en cuerpo de Nación, esas provincias antes dispersas, anarquizadas, divididas, desconocidas del extranjero, y que habían tenido sin embargo la virtud de reunirse, de sancionar una Constitución, que todos invocamos.

Encontramos en aquel período palabras hermosas, que es bueno recordar porque, al fin, en la historia de los pueblos americanos estos rasgos es necesario que se tengan presentes; encontramos un hombre que hace al país el gran servicio de derrocar la dictadura, empresa en que habían fracasado tantos años de esfuerzos; que desde la altura de la gloria pronuncia estas palabras: «No hay vencedores ni vencidos», y que las hace efectivas llamando a los hombres de todos los colores, de todas las opiniones políticas a participar de la obra de la organización nacional, y vemos allí a los antiguos unitarios como Fraguero, como Alvarado, como Pederuera, al lado de los federales como Guido, como García y muchos otros; y de ese conjunto de buenas intenciones, de ideas patrióticas, vemos surgir la Constitución nacional que, con ligeras modificaciones, todos aceptamos y que hoy todos defendemos.

Vino después la administración del general Mitre, y yo recuerdo haber oído aquí, sentado en la barra del Senado, las más acerbas acusa-

ciones, los más duros cargos, los proyectos para contrarrestar lo que se decía la humillación de las provincias, los preconsules, los batallones que oprimían, y refiriéndose, señor presidente, a escenas que no quiero recordar, porque alejo todo aquello que puede contristar.

Vino después la administración del señor Sarmiento y también aquí, en este mismo Senado, hemos visto todos, formularse las más acerbas acusaciones contra las intervenciones del señor Sarmiento, contra la actitud del ejército, de los jefes nacionales que oprimían, que humillaban, que degradaban las provincias según se aseguraba en este sentido.

Vino la administración que precedió a la actual. De ella he tenido el honor de ser ministro en dos departamentos, y puedo hablar con más seguridad, y puedo hablar con más conocimiento de ella que de las anteriores, cuyos actos no me toca ni estoy habilitado para juzgar.

¿Y qué sucedió en la administración anterior, señor presidente? Perfectamente intencionada, animada de los deseos más patrióticos, empeñada en respetar todos los intereses, en respetar todos los derechos es constantemente acusada de conculcarlos y de comprometerlos.

Es la historia de los partidos, son las pasiones, son las preocupaciones, son los resentimientos.

No extraño, pues, que se formulen en este caso acusaciones, porque comprendo que es la historia de todos los parlamentos y hasta cierto punto — conviene decirlo — es uno de los incidentes de la vida libre que conviene respetar en el interés de los destinos futuros del país.

Pero, señor presidente, cuando yo he oído formular cargos contra el gobierno actual, declaro con toda franqueza que he procurado darme cuenta de ellos, que he procurado investigar cuál es la causa, y que no he podido encontrarla.

Yo he preguntado: ¿dónde está el ejército de la Nación que generalmente se presenta en los pueblos como un medio de terror y de opresión? ¿Está, por ventura, acuartelado en las capitales de las provincias, imponiendo a sus gobernadores, aterrorizando a sus habitantes, pesando con mano de hierro sobre los actos electorales?

¡No, señor presidente! Está en la frontera, está alejado, dando seguridad al país, dando libertad a los pueblos de la campaña, dando, señor presidente, a la Nación la posesión de vastos territorios que servirán para el desenvolvimiento de su riqueza y de su prosperidad.

Yo me he preguntado al oír ciertos cuadros que se han trazado: ¿qué es del Poder Judi-

cial, de ese alto poder creado por la Constitución para que sirva de garantía a todos los intereses, a todos los derechos políticos de los ciudadanos? Me he preguntado: ¿ha desaparecido?

No, señor presidente: está en su puesto formado por los hombres más notables de nuestro foro, que llevan a ese tribunal el contingente de su ciencia, el contingente de sus virtudes y de su patriotismo.

He mirado a los Estados vecinos, y me he preguntado: ¿existen, por ventura, en algunos de ellos los grupos de emigrados que en otros tiempos llevaban la vida amarga del ostracismo, del destierro?

He procurado divisar dónde se encuentran, para ver si esto podía ser un motivo de fundamento a las quejas que se formulan, y felizmente, señor presidente, abriendo el mapa en que están representados todos los Estados vecinos, no he encontrado un solo punto en que residiera un emigrado argentino...

Sr. Baibiene. — Tiene muy corta vista el señor ministro.

Sr. Ministro del Interior. — ...y esto no es de extrañarse, desde el momento que para todos están abiertas de par en par las puertas de la patria.

Sr. Baibiene. — Quince mil correntinos hay emigrados.

Sr. Ministro del Interior. — Yo no conozco el hecho; podrán estar separados de la provincia de Corrientes; pero tienen las puertas de la Nación abiertas de par en par, empezando por la Capital donde el señor senador reside.

Yo, señor presidente, siguiendo el orden de mis investigaciones, he querido hacer el inventario de mis actos como ministro del interior, y he venido a registrar si he firmado algún decreto del presidente de la República que sea una coacción, una traba para el ejercicio de los derechos políticos; he buscado si he firmado uno de esos decretos de estado de sitio, que tantas veces suspendieron las garantías constitucionales entre nosotros, y he tenido la fortuna de haber encontrado completamente en blanco el libro en que se escribe esa clase de disposiciones y otras que restringen las libertades políticas.

He visto, señor presidente, si en algún punto del territorio nacional resuena el estrépito de las armas fratricidas, que tantas veces perturbará el sosiego de la Nación, y no lo he percibido; pues, por ventura, el único movimiento que se siente hoy es el de las industrias que prosperan, es el del comercio que se desenvuelve, es el de los vapores que surcan las aguas

de nuestros ríos, es el de los ferrocarriles que llevan por todas partes el progreso y la actividad!

Este es el cuadro de la República, y yo digo que donde la prosperidad existe, donde el progreso se consolida y donde la inmigración afluye, donde no hay persecuciones ni juicios políticos, no puede haber despotismo: hay seguridad y hay absoluta libertad.

Voy a terminar, porque me he extendido contra mis intenciones, y la hora es un poco avanzada.

Pero hay un deber penoso para mí todavía que debo desempeñar.

El señor senador por Corrientes pronunció en la última sesión una palabra que yo creo sinceramente no responde con fidelidad a su pensamiento...

Sr. Baibiene. — Responde fielmente a mi pensamiento.

Sr. Ministro del Interior. — Si respondiera como se sirve manifestarlo, diré que lo encuentro completamente en contradicción con su actitud en el Congreso; que la considero resistida por la dignidad de todos los poderes de las provincias y de la Nación, resistida por la Cámara en que se sienta el señor senador y resistida también por la Cámara de Diputados.

No es posible que si prevaleciera lo que el señor senador ha indicado, empleando una palabra que quizá no responde, como he dicho, a su pensamiento, todos permanecieran en silencio, todos permanecieran tranquilos y creyeran que desempeñaban dignamente sus respectivos deberes.

Sr. del Valle. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Debo recordar al señor senador que el proyecto está en discusión en general y que sería preciso declarar libre el debate.

Sr. Baibiene. — Hago moción para que se declare libre la discusión.

—Apoyado.

Sr. del Valle. — No tengo interés alguno en que se declare libre el debate para volver a usar de la palabra en la discusión en general, porque, como tengo el derecho de hablar en la discusión en particular, lo mismo que en la discusión en general, he de manifestar todo lo que tengo que decir.

Quizá fuera más regular para el orden del debate, que esto fuera dicho en la discusión en general, pero esto depende de la voluntad de la Cámara.

Sr. Igarzábal. — Se ha hecho moción en ese sentido y creo que debe votarse.

Sr. Barros. — Creo que en este caso se padece un error: el señor senador, como miembro de la Comisión en minoría, tiene derecho a usar de la palabra sin que la Cámara declare libre el debate.

Sr. del Valle. — El reglamento dice que el autor de un proyecto o el miembro informante de la Comisión que lo sostiene, tiene derecho de usar de la palabra repetidas veces, tantas cuantas quiera.

En este momento yo no sostengo el proyecto de la Comisión, sino que lo combato; por tanto no me creía amparado por el artículo del reglamento.

Sr. Presidente. — Creo que lo está, y pido disculpa al señor senador de no haberle concedido la palabra: creía que no era miembro de la Comisión.

Puede hablar cuantas veces quiera.

Sr. Rodríguez. — Creo que debiera votarse la moción.

Sr. Ortiz. — Habiendo sido apoyada la moción, que se vote.

Sr. Presidente. — Se va a votar si se declara libre el debate.

—Afirmativa.

Sr. del Valle. — Comprendo, señor presidente, la desventaja con que vuelvo al debate de este proyecto. He usado largamente de la palabra en la sesión anterior, quizá he abusado de la consideración de mis honorables colegas que se han dignado escucharme, y después de una larga discusión como la que ha tenido lugar hasta este momento, véome obligado de nuevo a tomar la cuestión desde su origen, porque no puedo ni debo dejar en pie algunos antecedentes que se han establecido, y que, en mi concepto, dañarían las ideas que defiende.

No se sorprenderá, pues, la Cámara si me ve de nuevo volver a esta fatigosa discusión histórica y constitucional, en la que para iluminar nuestro camino, nos vemos obligados a recurrir a la ciencia y a la experiencia de Estados Unidos, nuestro modelo en materia de instituciones.

Procuraré, sin embargo, en consideración a la Cámara y en reconocimiento de su atención, ser lo más breve posible y no demorarla sino el tiempo que me sea estrictamente necesario para expresar mis ideas.

El orden de la discusión ha quedado planteado. Se ha discutido la fase constitucional

de la cuestión, la de las conveniencias y la fase política, que fui el primero en tocar y cuya responsabilidad acepto en todas sus partes.

En mi actual exposición, tengo que seguir ese mismo camino.

La fase constitucional, se ha dicho, tiene dos puntos de mira: el de las instituciones de Corrientes y el de las instituciones de la Nación.

Del punto de vista de las instituciones de Corrientes, objetábamos los opositores al proyecto, que no hay en la Constitución de aquella provincia artículo alguno, ni disposición incidental, que autorice a la Legislatura local para hacer la cesión del territorio de que se trata, y contra este argumento se invoca el artículo de la Constitución nacional que, estableciendo la posibilidad de que se creen nuevas provincias en el territorio argentino, prescribe al mismo tiempo que la cesión se ha de hacer como requisito indispensable con el concurso de la Legislatura local, de donde se deduce que la facultad de que carecen las legislaturas locales, según el instrumento constitucional de las provincias, se encuentra consignado en la Constitución general, en el artículo a que antes me he referido.

A este respecto diré sólo dos palabras.

Nadie negará que las facultades de los poderes provinciales deben buscarse y encontrarse en sus instrumentos propios, en las constituciones de los Estados; nadie negará que ésta es cuando menos, si no la regla absoluta, la regla general de investigación y de interpretación, y que sólo excepcionalmente pueden encontrarse en la Constitución de la Nación reglas y principios que se refieran al ejercicio de facultades de los poderes provinciales, en cuanto éstas no atañen directamente al desempeño de funciones o de deberes nacionales.

De este principio deduzco, y me parece que deduzco con razón, que, cuando se trata de interpretar un artículo de la Constitución nacional, en su aplicación a las facultades que los poderes provinciales tienen, debe interpretarse como disposición excepcional, restrictivamente, porque esta es la regla de toda interpretación legal.

Y ahora bien: si se ha de interpretar restrictivamente, como queda establecido, el artículo de la Constitución que atribuye a las legislaturas de provincia la cesión del territorio para constituir nuevos Estados dentro de su propio seno o para reunirse con otros Estados y formar uno solo, yo digo: no está comprendida en este artículo la facultad de que en este caso se trata.

El señor senador por San Juan decía: si está comprendido lo más, ¿cómo no ha de estar comprendido lo menos! ¿Cómo la Legislatura que puede permitir que se constituya un Estado dentro de sus límites, no puede permitir que se forme de una parte de su territorio un territorio nacional!

Sr. Igarzábal. — Para hacer Estados.

Sr. del Valle. — No disento los objetos de los territorios federales porque ellos están marcados en la Constitución, porque han sido señalados claramente en el debate por el señor senador, y procedo con la más perfecta buena fe en las observaciones que quiero formular.

El señor senador observaba, pues, que teniendo las legislaturas la facultad para constituir Estados dentro de su territorio, no podía negárseles la de segregar una parte de él para convertirlo en territorio nacional que, con el tiempo, podía y debía ser un nuevo Estado; y preguntaba el señor senador: si es lícito lo más, ¿cómo no ha de ser lícito lo menos! Aquí empieza mi divergencia con el señor senador.

Es evidentemente más separar una parte del territorio de una provincia para constituir con ella un Estado, que separarlos para constituir un territorio nacional que sólo será Estado en el porvenir.

Categoricamente digo que no: al menos tal es mi convicción.

Los Estados que se forman dentro del territorio de una provincia, y que se incorporen a la unión, se encontrarán exactamente en las mismas condiciones desde el primer día que los Estados primitivos de la unión argentina.

Entonces, señor presidente, cuando un Estado desmembra parte de su territorio, porque en él existe población bastante para constituir un nuevo Estado, no hace nada que le perjudique a sí mismo, ni a los habitantes del territorio desmembrado; no hace nada que perjudique derechos adquiridos.

Si estudiamos la historia de los países constituidos como el nuestro, se observará que el criterio de los estados que se dividen para constituir dos o más, es el de las propias ventajas y conveniencias, creyendo que en efecto ganan, no solamente el nuevo Estado que constituyen sino aquellos de que le separan.

No hace mucho tiempo estudiaba el origen de la guerra de secesión en Estados Unidos, volvía como vuelvo siempre sobre ese punto sombrío de la historia de aquel país tan lleno de enseñanza para la República Argentina, y para todos los países que se gobiernan por un sistema análogo al de aquella Nación, y en-

contraba — era un defensor del Sur el autor de la obra — que entre las causas que habían producido la división, figuraba la manera cómo los Estados del Norte habían evolucionado hasta alcanzar su preponderancia sobre los Estados del Sur.

Los Estados libres aumentaban en población año por año en una gran progresión; pero cualquiera que fuera su acción en la Cámara de Diputados, se encontraba contenida por el sistema de equilibrio constitucional según el que los Estados no poblados tienen igual representación en la Cámara de Senadores.

Entonces comprendieron esta campaña: fraccionarse lo más que fuese posible para mantener en la Cámara de Diputados sus representantes y aumentar el número de senadores, trayendo al Senado dos senadores por cada nuevo Estado que se formaba.

Era natural que el territorio desmembrado para formar un nuevo Estado, habiendo formado una misma comunidad política, ligado por intereses permanentes y tradicionales con su fundador, vinieran con las mismas ideas y representando los mismos propósitos. Y así los Estados que debían fraccionarse eran los que pugnaban por la formación de nuevos Estados.

Sr. Igarzábal. — Los Estados del Sur no podrían hacer ese argumento, porque ellos tuvieron la fuerza desde que se juró la Constitución hasta la guerra de secesión, y la han tenido siempre en sus manos.

Sr. Avellaneda. — No, la han tenido durante cuarenta o cincuenta años, por ese medio.

Sr. del Valle. — Rogaría al señor senador, en obsequio a la tranquilidad del debate, no me interrumpiera dejándole el derecho de la réplica. Uso de la misma regla establecida por el señor ministro y por el señor senador.

Sr. Igarzábal. — No le interrumpiré.

Sr. del Valle. — Decía, señor presidente, que ese propósito existía y no responde a los objetos de la discusión el entrar a averiguar cuál de los dos partidos tenía preponderancia real en el Congreso; refiero los medios de que se valían los Estados libres para aumentar sus fuerzas hasta adquirirlas.

Y no solamente los Estados que se dividían pedían la desmembración y formación de nuevos Estados, sino que la parte desmembrada también — esto viene desde el origen de la Unión — era la primera en solicitar su incorporación.

Los señores senadores no ignoran que este deseo de los territorios de constituirse en Estados, de aumentar su personalidad política,

de tener representación directa en la Cámara de Senadores, no obstante vivir incorporados a otros Estados, se manifestó desde el principio, como se manifestó posteriormente en los territorios nacionales, hasta el punto de haberse organizado algunos territorios en Estados y solicitado su incorporación del Congreso americano, sin siquiera haber recibido la autorización previa para este procedimiento, cambiando su situación legal de territorio nacional, por acto de sus gobernadores o autoridades locales, que les facilitaban las formas indispensables para aquel objeto a efecto de habilitarlos a presentarse al Congreso pidiendo su incorporación.

Se comprende entonces que los habitantes de una parte del territorio de una provincia, no tengan, ni puedan tener inconvenientes en convertirse en Estado independiente; pero no sucede lo mismo cuando se pasa a ser territorio nacional, porque entonces, lejos de acrecer o avanzar en jerarquía política, se decrece, se disminuye, se rebaja la personalidad del ciudadano, de la agrupación política o del territorio.

Por consecuencia, no es más, del punto de vista que tomamos, desmembrar una parte del Estado para formar otro Estado, que conceder una parte de ese mismo Estado para formar un territorio.

Aquí me llega la oportunidad de contestar al señor ministro: no es exacto que los habitantes de un territorio nacional estén privados de sus derechos políticos; tienen la libertad de conciencia, su propiedad está al amparo de la Constitución, y enumeraba algunas otras libertades que por su carácter eran esencialmente civiles.

Estas no son las que se llaman libertades políticas en el lenguaje técnico: son libertades civiles que se disfrutaban en todos los países civilizados de la tierra, no solamente bajo los gobiernos libres, sino también en los despóticos.

No era un gobierno libre, nadie se atrevería a decirlo, el gobierno de Napoleón III; sin embargo, bajo su gobierno, estaba perfectamente garantizada la libertad de conciencia, la propiedad, etcétera. Eso responde a cierto nivel de civilización que lo mismo es susceptible que exista bajo el imperio de las instituciones libres, que bajo el imperio de un gobierno despótico, porque un despotismo moderno, ya sea que se ejerza en Europa o en esta parte del continente americano, no puede tomar la forma bárbara de los despotismos de Oriente; tiene que vestirse con las formas civilizadas de los gobiernos de Occidente cuyos avances se

detienen ante vallas insuperables que no pueden salvar en ningún caso.

Los habitantes de un territorio nacional no tienen derechos políticos y esa es la verdad. ¿Qué es lo que constituye o lo que se llama derechos políticos? Es el derecho de gobernarse a sí mismo, por tales o cuales medios, eligiendo diputados a su Legislatura, eligiendo gobernadores, electores de presidente, diputados nacionales y miembros del Senado, los unos directamente, los otros por intermedio de su representación en la Legislatura local.

De todos estos derechos están privados los habitantes de los territorios nacionales. Los habitantes de un territorio nacional no eligen su gobernador: se lo nombra el presidente de la República acompañado del señor ministro del interior; los ciudadanos de los territorios nacionales no nombran diputados al Congreso: nombran aquellos miembros informativos de que antes hablábamos, los delegados a la Cámara de Diputados, sin voto en sus sanciones; no tienen representación alguna en el Senado; en una palabra, no tienen lo que propiamente se llaman derechos políticos, hasta tanto que no son convertidos en Estados. Se dirá, que cuando lleguen a convertirse en Estados entonces tendrán derechos políticos. Es evidente, pero hay una situación intermedia, de tránsito, de territorios y de Estado incoada hasta llegar a convertirse en Estados, y tal situación es más baja que la de una provincia.

Entonces, señor presidente, volviendo a mi argumento, digo: no puede desprenderse del artículo de la Constitución que autoriza a las legislaturas de provincia a conceder parte de su territorio para formar nuevos Estados y que debe interpretarse restrictivamente la facultad de esa misma Legislatura para convertir su territorio poblado en un territorio sin representación política.

Hay otro artículo de la Constitución que también se relaciona con este punto y que ha sido materia de una larga disertación por parte del señor ministro del interior: el artículo que se refiere a los límites de las provincias.

Principio por declarar, señor presidente, que participo de la teoría histórica constitucional desenvuelta por el señor ministro, sobre las relaciones de la Nación con los Estados y su punto de comparación con la Unión Americana.

El punto en que me separo del señor ministro es éste: son los antecedentes históricos, sin duda, distintos en uno y otro país, pero el límite de las facultades de uno y otro gobierno, está en la Constitución.

Es la Constitución, pues, la única que nos puede servir de regla para averiguar si los poderes nacionales tienen la facultad que se les quiere atribuir.

No se puede en nombre de los antecedentes del país, deducir una facultad que no está implícita o explícitamente conferida en aquel instrumento.

Hablando de estas cuestiones de límites, recordaba el señor ministro, que el Congreso de los Estados Unidos no tiene la facultad de fijar límites y el Congreso de la Nación Argentina tiene esa facultad. Es exacto; pero es también exacto, señor presidente, y sería conveniente recordarlo, que la razón por que no figura en aquella Constitución la facultad que figura en la Constitución argentina, es porque allí no era necesaria y aquí sí.

El señor ministro ha hecho ligera mención de cómo se resolvió la cuestión de los territorios americanos, principalmente de los territorios del Oeste. Hice referencia a ese mismo antecedente en la sesión anterior: fué primero al Congreso Continental que se presentó esta cuestión, antes de estar aceptados por los Estados Unidos los artículos de la Confederación, porque, aun cuando tenían la aprobación del Congreso, no tenían la de los Estados; en el intervalo que medió hasta la aceptación se produjeron los hechos a que aludo. Algunos de los Estados que no tenían territorios, declararon que no entraban en la Unión, si los Estados que los pretendían no empezaban por cederlos, y si no se consignaba entre las facultades de la Confederación la de autorizar al Congreso para resolver las cuestiones de límites entre uno y otro Estado. Se buscaba una resolución por la cual quedaran a beneficio de la Unión los territorios que había que conquistar con los esfuerzos, la sangre y el dinero de toda la Unión.

Fué entonces que el Estado de Nueva York hizo la primera cesión, y fué entonces que los Estados que se oponían a la Unión por falta de aquella cláusula, dijeron: el ejemplo de Nueva York ha de ser seguido y nos incorporamos a la Confederación. Poco después todos los Estados que tenían territorios los cedieron a la Unión, con excepción del de Georgia y Carolina del Sur.

Vino la discusión de la Constitución al Congreso, y en el Congreso se supuso con razón que los dos únicos Estados que quedaban sin límites determinados concluirían por seguir el camino que les habían trazado sus hermanos con sentimientos patrióticos y levantados, y

para no irritar el sentimiento de estos mismos Estados que resistían la concesión, como para no dificultar la unión americana; se prescindió por completo de los límites, dejando a su patriotismo y a sus nobles impulsos, lo que podía haberse establecido en la Constitución nacional.

Estas esperanzas no fueron defraudadas, y los señores senadores saben que poco después el Estado de Carolina del Sur en 1790, y el de Georgia en 1802, hicieron la cesión a que antes me he referido.

En la organización argentina, en el momento de constituirnos como nación bajo el imperio de la Constitución, no nos encontrábamos en las mismas condiciones.

La cuestión de límites interprovinciales en la República Argentina se presentaba complicada, bajo formas bien diversas y de tal modo que era imposible que se dejara sin establecer alguna resolución a este respecto.

La mayor parte de los Estados argentinos habían recibido sus cartas de fundación de los conquistadores. Otros las habían recibido directamente de la corona de España, pero éstos me parece que son los menos, si es que hay más de uno.

Se sientan en este recinto un senador por Córdoba y un senador por Santa Fe. ¿Cuál sería la situación de estos señores si tuvieran que sostener los límites de sus respectivas provincias según la carta de su fundación?

Juan de Garay poblaba la provincia de Santa Fe y le daba 50 leguas al Oeste sobre el río Paraná en toda su extensión, fijándole como límite hacia el Paraguay los Anegadizos Chiecos y de Santo Espíritu, río abajo, 25 leguas. ¿Hasta dónde llega este límite? Llega hasta la ciudad de Córdoba.

Pero viene la conquista del Perú, llega Cabrera y puebla Córdoba. ¿Y qué límite le asigna? Avanza sobre el Paraná y da un puerto en Santo Espíritu a la provincia de Córdoba.

Una cuestión de esta naturaleza no podía ser resuelta sino por un poder político, pues ni siquiera era posible entregarla al poder judicial.

Y lo que digo de la provincia de Córdoba y de la provincia de Santa Fe, lo digo también de Buenos Aires y de Santiago del Estero, que todavía se encuentra en cuestión con Santa Fe, por una parte, y no sé si por otra con alguna provincia más.

Lo mismo digo de la provincia de San Luis, cuya cuestión de límites con Córdoba está todavía sometida a arbitraje. Y lo digo de Corrientes que no tiene bien demarcados los lími-

tes por el lado de Entre Ríos, o a lo ménos, nó los tiene con arreglo a la carta de fundación.

La misma provincia de Santa Fe no tiene todavía reconocidos sus límites respecto de los territorios nacionales, y el otro día en el seno de esta Cámara se ha discutido una ley por la cual se manda consignar fondos a la tesorería nacional, por venta de tierras hechas en la provincia de Santa Fe, que se ha creído podrían pertenecer a la Nación y que con arreglo a títulos que Santa Fe puede exhibir, evidentemente están dentro del territorio de aquella provincia sin que pueda ser esto materia de discusión.

Se concibe por esto cuáles eran las condiciones en que se encontraban las provincias, con arreglo a los títulos otorgados por los conquistadores, sin hablar de las tierras que quedaban fuera de esas demarcaciones y que no estando comprendidas en los límites de ningún Estado debían pertenecer a la Nación como sucesor de los derechos de España; de aquí la necesidad de que en la Constitución nacional se consignara un artículo expreso para resolver tan graves dificultades.

Pero ahora llegamos a otra fase la cuestión: la facultad que tiene el Congreso de la Nación para fijar los límites de las provincias ¿es una facultad arbitraria? Digo arbitraria, no en el sentido de que pueda hacerse lo bueno o lo malo indistintamente, sino en el sentido de que el Congreso no tenga más regla para proceder que el propio criterio.

En la sesión anterior manifesté mi opinión: creo que no, señor presidente; creo que la facultad del Congreso de fijar límites a las provincias no es una facultad arbitraria, y para ello no me fundo en consideraciones de equidad que sería inútil hacer valer, sino en consideraciones de derecho estricto. Ocurro a la misma fuente constitucional y digo: no es posible que la Constitución argentina haya consagrado en un inciso la facultad del Congreso para fijar arbitrariamente los límites de cada uno de los Estados, cuando un artículo de las declaraciones generales dispone expresamente que no se podrá tocar el territorio de las provincias para formar nuevos Estados, sin el consentimiento de las legislaturas respectivas. Se ve que un artículo está limitado por el otro y que el ejercicio de la facultad constitucional debe tener, cuando ménos, la limitación de los hechos existentes, los derechos consagrados, la posesión de cada provincia en el momento de su incorporación a la Nación o en el momento en que el Congreso dicte la ley de límites.

El señor ministro del interior reconocía que el Congreso no debería proceder arbitrariamente; pero entendía que sus facultades no tienen limitación constitucional — me parece que así se expresó — y este es el punto en que nos encontramos divergentes.

Decía también el señor ministro que en el momento de declararse la independencia no había territorios nacionales en los Estados Unidos; que todos eran territorios provinciales. Establecía este antecedente para justificar la situación que vino posteriormente.

Disiento de esta opinión y disiento en buena compañía, como más adelante lo he de probar.

En las cartas acordadas por la corona de Inglaterra y en las instituciones provinciales de diversas colonias de la Unión, se determinaba cuáles eran los límites de cada una; no puedo afirmar que todas las colonias tuvieran esta fijación de límites; pero sí que la tenían la mayor parte.

Pocos años antes de la declaración de la independencia se discutía todavía entre Francia e Inglaterra cuál era el límite divisorio de sus posesiones.

El señor ministro recordaba el tratado de 1763, por el cual se retiró el de Francia y avanzó el límite de Estados Unidos hasta el Missisipi. Este tratado vino después de la guerra de los siete años y todos los terrenos ganados por la corona de Inglaterra en su virtud no pertenecían a tal o cual colonia, sino a la corona inglesa. Cuando los Estados Unidos se declararon independientes e Inglaterra los reconoció como nación libre y soberana fijándole sus límites en el artículo 2º, pasaron a la Unión Americana, como entidad política nacional, todos los territorios que habían pertenecido a la corona de Inglaterra y que no estaban incorporados en las cartas de las colonias.

Quisiera contestar metódicamente, pero se me ha escapado una observación que hacía el señor ministro refiriéndose a las facultades de las legislaturas.

El decía: los límites señalados en la Constitución no implican propiamente una prohibición constitucional respecto al ejercicio de los poderes del cuerpo legislativo, porque la fijación de límites está sujeta a los tratados, guerras, etcétera.

Creo, señor presidente, que hay, en efecto, o que puede haber inconvenientes en fijar los límites de una nación en su carta constitucional, porque más que el derecho, los hechos pueden venir a modificar esos límites. Sin embar-

go, no sería un obstáculo el que los hechos hicieran tales modificaciones, porque las constituciones lo que consagran es el derecho.

Pero reduciendo la cuestión a prerrogativas de las provincias, trayéndola al terreno de las facultades de los Estados, decía el señor ministro del interior: Méjico, Colombia — no sé si citaba algún otro país — se encuentran en condiciones análogas de organización, las constituciones de los Estados fijan los límites de éstos y al mismo tiempo tienen un artículo que autoriza la formación de otros en el territorio de los existentes, y para la creación de los nuevos no se ha necesitado nunca recurrir a las convenciones constituyentes.

Este era el argumento del señor ministro; pero el caso es perfectamente sencillo y explicable: ¿para qué se había de necesitar una Convención si en la Constitución estaba acordada la facultad?

La facultad constitucional hacía inútil la Convención, precisamente porque se dice: los Estados pueden consentir en la subdivisión de sus territorios para la formación de otros Estados; no se necesita la Convención.

De manera que el argumento del señor ministro, lejos de probar en favor de su tesis, prueba en favor de la que sostengo, y nos llevaría a esta conclusión: que una legislatura local solamente podría modificar los límites del Estado cuando la Constitución autorizara la subdivisión de sus territorios, lo que no sucede en el caso de Corrientes.

Hay otra disposición en nuestra Constitución y es el inciso 27 del artículo 67 que determina que el Congreso tiene jurisdicción exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y en todos los otros lugares adquiridos por compra o cesión de las provincias para construir fuertes, arsenales u otros establecimientos de utilidad nacional.

Recordé, señor presidente, en la sesión anterior, que este artículo no era sino una traducción del artículo de la Constitución norteamericana, pero que desgraciadamente complicaba nuestras dificultades la circunstancia de que una palabra consignada en la Constitución Americana estaba mal traducida, y, en efecto, es así.

La Constitución Americana no dice «otros establecimientos», dice «edificios»; tiene expresamente la palabra *building* que responde directamente a «edificios» y no a «establecimientos».

Pero el señor senador por San Juan, rechazando la interpretación del artículo constitucional en el sentido que yo le daba, decía: no es cierto lo que afirma el senador por Buenos Aires de

que la doctrina constitucional a este respecto sea la de requerir jurisdicción en estos casos, porque la Nación necesita tener los elementos que aseguren su integridad, garanticen su propiedad, bajo su propio dominio.

Esto importaba rechazar la interpretación que había dado aquel artículo y desconocer el origen de la disposición. Yo no puedo contestar a la negación del señor senador con una afirmación de mi parte, porque una y otra tendrían igual peso en el ánimo del Senado; pero puedo contestarle con la misma autoridad que el señor senador invocaba, con la autoridad de Story. Story lo establece de una manera clara y expresa, no haciendo, sino reproducir las palabras de *El Federalista*, que en una forma o en otra, están consignadas en todos los maestros del derecho constitucional. Traduciré mal porque el texto está en inglés, pero bastará para que la Cámara se dé cuenta de la doctrina. Story dice — párrafo 1.223 —: «La otra parte del poder, dando exclusiva legislación sobre los puntos cedidos para la creación de fuertes, almacenes, etcétera, parece todavía más necesaria para las públicas conveniencias y seguridad. Los dineros públicos gastados en tales lugares y la propiedad pública depositada en ellos y la naturaleza de los deberes militares que allí se pueden requerir, todo exige que estén exentos de la autoridad del Estado.»

Esto dice refiriéndose al artículo de la Constitución, o inciso en que habla de la cesión para construcción de fuertes, almacenes, etcétera.

Sr. Igarzábal. — Story habla como que es conveniente a los intereses de la Unión la jurisdicción del Congreso; pero dice terminantemente que nunca se ha entendido, cedido por la legislatura un local, con jurisdicción, si no se ha establecido expresamente.

Sr. del Valle. — Esta es otra cuestión, que no interesa al punto en discusión.

Sr. Igarzábal. — De manera que hay arsenales y almacenes donde el Congreso no ejerce jurisdicción.

Sr. del Valle. — Voy a contestarle.

Yo sostengo y demuestro la exactitud de mi doctrina, pruebo que estoy en la tradición correcta de la doctrina americana; pero el señor senador hace referencia a otra cosa que no tiene que ver nada con la cuestión.

En Estados Unidos, decía el señor senador, la jurisdicción no la adquiere la Nación por el hecho de construir obras públicas en territorios de los Estados. Por ejemplo, si construye un camino militar, podrá ejercer cierta juris-

Septiembre 22 de 1883

dicción, para componer el camino y mantenerlo, pero no tiene jurisdicción sobre personas o cosas que están sobre el camino, en cuanto no se refieran al orden nacional. Entonces, agregaba, se conserva la jurisdicción provincial sin perjuicio del uso que haga del camino la autoridad nacional.

Sr. Igarzábal. — Aun en el caso de cesión, la Nación pide permiso al Estado que le ceda un territorio para hacer arsenales, etcétera. Si la cesión es simple, se entiende que el Estado conserva su jurisdicción; lo contrario sucede cuando declara que cede y entrega la jurisdicción.

Sr. del Valle. — Declaro que la doctrina del señor senador a que acabo de referirme es correcta y constitucional, pero agrego que no tiene nada que hacer con la materia que discutimos.

Sr. Igarzábal. — Si no tiene nada que hacer, ¿para qué la ha recordado?

Sr. del Valle. — En mi concepto no tiene nada que ver y la he recordado para demostrarlo.

El señor ministro del interior, ocupándose siempre de esta cuestión de la cesión, decía: ¿por qué hemos de considerar que no tiene facultad el Congreso para obtener por cesión esta pequeña parte del territorio de Corrientes, cuando tiene facultad de hacer tratados que puedan comprometer una parte mucho mayor de territorio nacional, cuando tiene la facultad de disponer de los dineros y de las armas de la Nación, cuando, en una palabra, ejerce la jurisdicción soberana y suprema sobre todos los habitantes y sobre todos los intereses radicados en su suelo?

Sr. Ministro del Interior. — No, permítame que le interrumpa.

Probablemente no me he expresado con claridad.

Hice ese argumento hablando de la forma, cuando el señor senador por Corrientes increpaba que el Poder Ejecutivo antes de dirigirse al gobierno de Corrientes debió solicitar del Congreso.

Sr. del Valle. — Son dos partes. También recordaba que había dicho eso. Si manifiesta el señor ministro en que no lo ha dicho, no insistiré.

Sr. Ministro del Interior. — Ya he explicado...

Sr. del Valle. — Bien. Pasaremos adelante.

Tócame, señor presidente, la parte más espínosa de mi exposición, aquella en que, lo

declaro con ingenuidad, se presenta el señor senador, miembro informante de la mayoría con mayores ventajas en el debate. La cuestión que se refiere a la transmisión, para convertirse en territorio nacional, de la parte poblada de un territorio nacional.

Dejo de lado el incidente que se produjo sobre la afirmación y negación de si Story decía o no lo que el señor senador afirmaba y que por mi parte negaba. Story, diré de paso, no decía nada; lo decía Odent en la traducción francesa.

Sr. Igarzábal. — ¿Y no decía nada Story?

Sr. del Valle. — Voy a llegar ahí. Lo decía Odent en la traducción francesa, en un capítulo hecho exclusivamente por él, sin intervención de Story, y lo dice una sentencia de la Corte Suprema, que no es de Story tampoco, a la que el señor senador se refería, apelando al libro de Story; es una sentencia invocada por el señor ministro del interior, para probar otra parte de sus ideas y de la que yo también me voy a servir, sentencia pronunciada en el caso de Dred Scott versus Sandford, que se encuentra en el tomo XIX de la colección de Howard, principia en la página 495 y figura parte de ella en una nota de Story.

Sr. Igarzábal. — ¿Y Story no dice lo que he leído en la sesión anterior?

Sr. del Valle. — Lo que me ha enviado el señor senador, diciéndome que es de Story, no es de Story.

Sr. Igarzábal. — Es del juez Story.

Sr. del Valle. — No es de Story, es una sentencia de la corte transcrita en Story.

Sr. Igarzábal. — Son opiniones de Story.

Sr. del Valle. — Está equivocado.

Sr. Igarzábal. — De ninguna manera.

Sr. del Valle. — Creo que es la opinión del juez Taney, a lo que se refiere el señor senador.

Sr. Igarzábal. — Es una cita de Story, puesta por Story.

Y pido desde ya que el libro de Story sea puesto en Secretaría, para confrontar la cita de Story con la cita mía, para ver si habla Taney o Story.

Sr. del Valle. — Lo único puesto al pie del tratado de Story es una parte de la sentencia pronunciada en el caso a que antes me he referido.

Sr. Igarzábal. — Es una noticia, no es una sentencia.

Sr. del Valle. — No será entonces la parte que me envió marcada el señor senador.

Sr. Igarzábal. — Si el señor senador lo dnda, puedo leerla.

Sr. del Valle. — No vale la pena el incidente; vale tanto que lo haya dicho Story como que lo haya dicho Taney.

He indicado sólo de paso los antecedentes que había en la cuestión, sin intención de detenerme en ellos.

Dejando de lado el incidente, vamos al fondo del asunto.

Mi tesis era ésta: Los Estados no han cedido territorio propio con población a la Unión, transformándolos así en territorios nacionales. La tesis del señor senador era la contrario: los Estados han cedido territorio propio con población a la Unión, para ser declarados territorios federales. Me parece que esta era la posición de uno y otro.

En efecto, Odent, en la parte citada y leída por el señor senador, hace referencia de que el Estado de Carolina del Norte cedió a Estados Unidos, en 1790, la parte del territorio en que se formó posteriormente el Estado de Tennessee, en 1796.

La referencia de Odent, hecha por el señor senador, es perfectamente exacta, en cuanto a la afirmación de aquél.

Sr. Igarzábal. — Y en cuanto a la de Story.

Sr. del Valle. — En cuanto a la afirmación del señor Odent. Permítame el señor senador.

Sr. Igarzábal. — No lo voy a interrumpir más. Perdone el señor senador.

Sr. del Valle. — Le ruego que no me interrumpa, únicamente para seguir el hilo de mi exposición y no fatigar al Senado más de lo necesario.

Me conviene, en este debate, recordar hasta la forma en que se hizo la cesión, para demostrar las grandes consideraciones, los altos intereses nacionales que se tenían en vista al hacerla.

He tenido ante mis propios ojos el acta de cesión de Carolina del Norte.

El poder acordado por Carolina del Norte a sus dos senadores, para hacer la cesión, lleva la fecha de Diciembre de 1879.

Dice:

«Por cuanto los Estados Unidos, reunidos en Congreso, han recomendado repetida y calurosamente a los Estados Unidos de la Unión, reclamantes o dueños de territorios vacantes hacia el Oeste, hacer cesión de parte de ellos, como un medio más de apresurar la extinción de las deudas y de establecer la armonía de los Estados Unidos; y deseando los habitantes del territorio del Oeste que tal cesión se haga, para tener más amplia protección que la que han

recibido antes, etcétera, se autoriza a los delegados para que hagan la cesión.»

Este documento tiene algunas partes dignas de consideración. Primeramente, justifica todo lo que hemos dicho respecto al móvil de estas gestiones. Se trataba de consolidar la unión nacional, eran altos intereses los que exigían la cesión del territorio, era el gobierno de Estados Unidos el que, desde el Congreso continental las pedía y eran los habitantes del territorio de Tennessee los que también solicitaban se accediera a este deseo del Congreso y que fuera declarado territorio nacional, circunstancias que me parece no se encuentran en el caso presente.

Esto no hace a la cuestión constitucional que debatimos, pero tiene mucho valor como antecedente, dada la diferencia de situación en que nos encontramos respecto de Corrientes.

Pero yo pregunto, señor presidente, ahora, — y aquí vengo a la cuestión, al punto en que reconozco mayores ventajas al señor senador y al señor ministro — ¿cedían en efecto los Estados, territorios propios exclusivos? ¿No había cuestión sobre esos territorios? ¿Era su derecho reconocido? ¿Estaban dentro de sus límites? ¿Era una parte de su verdadera población como es la población de Posadas respecto de Corrientes después de fijados sus límites, la que se cedía a la Unión? No, señor presidente; se cedían territorios disputados por los Estados Unidos.

Y aquí mi afirmación se apoya en autoridad más alta que la de Odent; en la de Taney y en la del juez Curtis, el historiador de la Constitución de Estados Unidos, y se va a ver que no tenía el señor senador por San Juan tanta razón, como él creía, aunque sus referencias fueran exactas.

Voy a citar palabras textuales, para evitar rectificaciones.

La sentencia pronunciada en el caso de Dred Scott versus Sanford, sentencia que tiene trescientas y tantas páginas impresas, lo que prueba cuál fué la madurez con que se dictó y el estudio con que aquellos hombres eminentes resolvieron el punto sometido a su disensión; aunque sólo se trataba de resolver la jurisdicción que podía ejercitar la Nación respecto de esclavos internados en un territorio federal, va a demostrar cómo es exacto lo que estoy sosteniendo.

Aquí consta que el juez Taney pronunció la sentencia a nombre de la mayoría de la corte y que el juez Curtis pronunció su opinión en disidencia con la mayoría.

Dice el juez Taney, en la página 434 del libro de sentencias a que antes me he referido y que está aquí y queda a disposición de la Cámara, sin embargo que pertenece a la biblioteca del Congreso. Dice: «El ejemplo de Virginia fué seguido pronto después por otros Estados y al tiempo de la adopción de la Constitución todos los Estados que tenían una situación análoga habían cedido sus tierras desocupadas excepto la Carolina del Norte y Georgia. El principal objeto por el que esas sesiones eran deseadas y se hacían, era el de su valor pecuniario y para poner término a la peligrosa controversia sobre quién sería el dueño de ese dinero cuando la tierra se vendiera.»

Es conveniente que los señores senadores no olviden que la causa por que se disputaba, cuando se discutían estos territorios, no era tanto por la jurisdicción cuanto por el valor pecuniario de la tierra que se iba a enajenar, y por eso es que en el acta de cesión de Carolina del Norte se dice: «para apresurar la extinción de las deudas»; porque este era, como lo reconocen los constitucionalistas, uno de los principales objetos que se tenían en vista, y por eso el juez Taney señala la dificultad que se iba a producir entre los que se disputaban el derecho al territorio Oeste de Carolina del Norte y Georgia, que no eran otros que los mismos Estados Unidos, como lo voy a demostrar ahora con la autoridad de Curtis, que es más explícito.

El juez Curtis, en la página 607 del mismo libro dice: «Debe recordarse también, como ha sido ya establecido que no sólo se esperaba confiadamente por los otros Estados que Carolina del Norte y Georgia completarían el plan ya ejecutado por Nueva York, Virginia, Massachusetts, Connecticut y Carolina del Sur, sino que era opinión, no poco prevalente, que el justo título al «país de atrás» como se le llamaba, residía en los Estados Unidos, en virtud del tratado de paz y que no podía ser reclamado, con derecho, por ningún Estado individualmente.»

Pero vamos más adelante. Como lo he indicado, se trataba de averiguar en la causa de Dred Scott versus Sanford qué eficacia tenía la cláusula constitucional sobre territorios, respecto de los territorios adquiridos de gobiernos extranjeros, — precisamente el caso citado por el señor ministro del interior, — el hecho se produjo con relación a territorios que habían dependido de la Luisiana, y se preguntaba si el artículo de la Constitución era o no aplicable a ellos no habiendo formado parte del territorio de los Estados Unidos en el momento

de sancionarse la Constitución; y entonces dice Curtis en la página 612: «Limitada esta cláusula al territorio que entonces pertenecía a los Estados Unidos colocaría en una posición extraordinaria el territorio comprendido dentro de los límites asignados por sus cartas a Carolina del Norte y Georgia. El derecho a este territorio era entonces pretendido por esos Estados y por los Estados Unidos; sus pretensiones respectivas quedaban deliberadamente indeterminadas por las palabras expresas de esta cláusula — la cláusula de la Constitución — y cuando aquellos Estados hicieron cesiones, fué únicamente de sus pretensiones a este territorio, sin que los Estados Unidos negaran ni admitieran la validez de esas pretensiones, así que fué imposible entonces saber si este territorio pertenecía o no a los Estados Unidos y esa imposibilidad continúa hasta hoy día.»

Yo no pretendo saber lo que no sabe el juez Curtis. Digo que la discusión existía sobre quién era el propietario de esos territorios, y entonces el caso no es análogo al de la cesión de Posadas: es análogo al del resto del territorio de Misiones poblado, al de Patagones sobre el cual se discutía si era o no parte de la provincia de Buenos Aires, y respecto de lo que se ha podido adoptar una resolución con estos mismos antecedentes, declarándolos nacionales precisamente porque había duda sobre el derecho, porque la Nación aquí como Estados Unidos allí sostenían su derecho contra la pretensión de los Estados.

Es claro que cuando la cesión se hizo, eliminándose al punto todas las dificultades, el Congreso de Estados Unidos no había de proseguir la discusión desde que se le cedía lo mismo que pretendía por derecho propio; pero, como dice el juez Curtis, es imposible resolver si aquellos territorios eran o no de los Estados.

En nuestro caso no se trata de averiguar si un territorio que la Nación pretende como propio, puede pasar con población a su jurisdicción; sino si un territorio que perteneciera indiscutiblemente a un Estado de la Unión, será desmembrado para pasar a las condiciones de territorio sin representación.

Necesitaba decir estas palabras, y detenerme en la lectura sucinta de las autoridades en que me apoyo, porque comprendía el efecto hecho con la lectura de las citas con que el señor senador por San Juan venía preparado. Verdad es que yo las había previsto y traía réplica más autorizada, puesto que donde habla el juez Taney y Curtis, deben callar Odent

Septiembre 22 de 1883

CAMARA DE SENADORES

32ª Reunión. 50ª Sesión ordinaria

y otras personas que no tengan su ciencia, ilustración y gran autoridad moral

Sr. Igarzábal. — Yo no los contradigo, reconozco la autoridad que tienen; pero las citas de estos autores sirven para confirmar mi exposición hecha en la sesión anterior.

Sr. del Valle. — Me alegro que así le parezca.

El señor senador tocó la cuestión de la cesión de los territorios de Misiones desde el punto de vista de las conveniencias, a las cuales ha dedicado también algunas palabras ligeras el señor ministro del interior.

Me parece, sin embargo, que esta cuestión no está siquiera rozada en la réplica a las razones que he hecho valer ante la consideración de la Cámara sobre este punto.

¿Cuál es la conveniencia de este proyecto, señor presidente?

Todavía no se ha dicho una sola palabra para probar esa conveniencia, más que las que insinuó el señor miembro informante de la mayoría de la Comisión repitiendo la nota del señor gobernador de Misiones.

Si no temiera fatigar la atención de la Cámara, pediría que se leyera esa nota, para que se viera a qué queda reducida la conveniencia de este acto; a no hacer un camino que vaya directamente desde el punto tal, que sirve de capital a Misiones, hasta los pueblos que se encuentran en la costa del Uruguay, y a no disminuir el comercio de yerba que el pueblo de Posadas hace desde tiempos anteriores; esto con relación a los intereses de Posadas; y frente a esas conveniencias, yo he presentado otras mayores, que no tienen término de comparación con aquéllas, tendientes a vigorizar las posesiones nacionales, a afianzar el derecho nacional por medio de la posesión sobre las costas del Uruguay, en donde nuestras tierras son disputadas por un vecino poderoso.

He recordado a la Cámara que fué esta promesa uno de los medios por que se obtuvo el asentimiento del Congreso para declarar federal aquel territorio. Y hago este argumento, e insisto en él en presencia del señor ministro del interior, porque aquí está el nervio de la cuestión, aquí está el punto capital, y porque el señor ministro del interior no sólo tiene para este asunto la autoridad de un representante del Poder Ejecutivo como pudiera ser cualquier otro en su lugar, sino la que le da el haber sido ministro de relaciones exteriores; durante mucho tiempo en dos administraciones, tiene la experiencia y la práctica de estos negocios y puedo, con derecho, pregun-

tarle: frente a estos intereses de magnitud nacional que apunto, el señor ministro del interior, ex ministro de relaciones exteriores, ¿puede decir que es preferible a construir un camino, radicar la población sobre las costas del Paraná, dejando desguarnecidas las costas del Uruguay?

Apelo al sentimiento patriótico, a la experiencia y a la ciencia del señor ministro del interior, para que declare hasta dónde la posesión robustece el título y a la conciencia de mis honorables colegas para que después de escuchar su respuesta resuelvan la cuestión que debatimos.

Esta no es ya cuestión de constitucionalidad, sino de conveniencias públicas y nacionales.

Sabemos lo ocurrido con este asunto; el señor ministro nos lo ha dicho: remitió el proyecto al Senado, después de haberle dado trámite, creyendo que se trataba de un asunto insignificante, sin prestarle atención, y nunca consideró que podía promover una discusión de esta naturaleza.

Y bien, señor presidente, ¿no es tiempo de meditar que en este asunto hay más graves intereses que los que se habían creído encontrar a primera vista? ¿No hay tiempo todavía para retroceder, sacrificando las exigencias del amor propio, pasando por encima de todos estos pequeños intereses de que se ha hecho mención, y que yo no necesito recordar a la Cámara, porque no influyen absolutamente en mi ánimo para la decisión de este punto? ¿No es tiempo de sobreponerse a todos esos intereses, digo, y de resolver la cuestión simplemente desde el punto de vista de los intereses nacionales, de traer a nosotros la cuestión de la capital de Misiones y examinarla con prudencia, con tiempo, con frialdad y ver si efectivamente conviene que la radiquemos en Posadas, que aumentemos los intereses sobre la costa del Paraná, que hagan después más difícil su traslación, o que desde ahora digamos que la capital de Misiones se ha de establecer sobre el río Uruguay?

Es posible, señor presidente, que el amor propio prevalezca sobre tan altas consideraciones, porque la debilidad humana impide muchas veces retroceder ante la evidencia, cuando uno está comprometido en un debate.

Por mi parte declaro, que si el señor ministro, que si los sostenedores de este proyecto ante consideraciones de esta naturaleza dijieran: suspendámonos este asunto y vamos a tratar la cuestión de la capital de Misiones,

del punto de vista de los intereses nacionales que se han apuntado, vamos a ver si es cierto lo que dice este senador que no tiene otra inspiración que la de su patriotismo en este momento, correspondería a su actitud, me sobrepondría también a las pequeñas vanidades personales y principiaría por decir al representante del Poder Ejecutivo: quiero olvidarme de los cargos que he dirigido a la administración, para recordar solamente que en asuntos de esta naturaleza, los sentimientos de patriotismo prevalecen en su seno como en todos los miembros del Congreso argentino.

Con estas ideas, señor presidente, y colocando así la cuestión, no puedo volver sobre las recriminaciones políticas que, en uso de mi derecho y en cumplimiento de mi deber, creo que puedo y debí dirigir al Poder Ejecutivo.

El señor ministro, por otra parte, ha tocado con tal prudencia esta fase de la cuestión que faltaría a las leyes de la cortesía si fuera insistente sobre los mismos cargos, después de haber esperado todo lo que mi conciencia me aconsejó que dijera.

Pero hay un punto que se refiere a la fase política de la cuestión que no debo pasar en silencio, y es la inoportunidad de que han sido tachadas mis palabras, no por el señor ministro, que con suficiente galantería ha reconocido el derecho con que venimos a debatir la política del Ejecutivo, a propósito de este o cualquier otro asunto que llega al Congreso, sino por el señor senador por San Juan, cuyas palabras no puedo aceptar y que en la sesión de ayer empezó declarando inoportunas las mías y dirigiéndome un reproche implícitamente por haber traído tal discusión al Senado.

Yo sé bien que cuando el lago está sereno puede parecer inoportuno que se arroje una piedra que enturbie sus aguas; yo sé bien, señor presidente, que causan menos fastidio, menos irritación, menos intranquilidad las votaciones silenciosas de la Cámara, los votos del presupuesto, partida por partida, objetando cinco pesos a un portero y diez a un escribiente, o los votos de los créditos suplementarios que votamos año por año, sin incluirlos en la ley de presupuesto.

Pero sé también, señor presidente, que ese no es el gobierno parlamentario; sé que el gobierno parlamentario es la discusión, la tribuna libre, la discusión amplia, apasionada si se quiere y ardiente también, porque es natural que, cuando son hombres los que gobiernan a

los pueblos y a los que aprecian su marcha política, no pueden prescindir de las pasiones que los mueven en todos los actos de la vida.

El derecho de crítica, el derecho de censura, la palabra que contiene a los que mandan, ¡eso es la vida parlamentaria en su esencia!

¿Cuál es la división de nuestro sistema de gobierno?

Tenemos un Poder Judicial para ejercitar la potestad de la justicia soberana del país; ha sido dotado de toda la autoridad que el poder humano podía acordarle.

Cuando el Poder Judicial habla, el pueblo acepta y tiene que aceptar su palabra como palabra de verdad. La Constitución, las instituciones humanas, lo han dotado de un privilegio para el orden positivo de los intereses sociales que sólo pudiera acordársele a la divinidad, del don de la infalibilidad.

El Poder Ejecutivo tiene la fuerza en su mano, tiene los dineros públicos en su tesorería, tiene los medios de favor, de influencia y de preponderancia en toda la atención que la administración de un gran país le da.

¿Qué es lo que tiene el Congreso?

El Congreso tiene tres resortes en su mano: la acusación de los funcionarios públicos, el voto de los dineros públicos, la tribuna libre y pública. ¡La acusación! Pero la acusación no es un resorte de que puede echarse mano a cada momento, porque no es un medio que responda a las necesidades de un pueblo en épocas normales sino en momentos supremos.

Baste decir que en Estados Unidos no ha habido más que una acusación, cuyo resultado fué la absolución del acusado y en mi concepto bien merecida.

¡En la República Argentina no ha habido ninguna! Y no es porque no hayamos tenido que lamentar gobiernos opresores.

Existe también, señor presidente, el recurso que proporciona al Congreso la votación del presupuesto; pero está en la conciencia de todos los señores senadores la manera cómo votamos generalmente esa ley, porque los presupuestos vienen a nosotros a última hora, o en los últimos días de las sesiones ordinarias o en las de la prórroga, de manera que cuando llega a nuestras manos, apenas tenemos tiempo de votar, sin examen y sin estudio, las inmensas sumas que se invierten en el sostenimiento de la administración. Así es como votamos los impuestos y votamos los gastos, sin tener en cuenta, no digo el conjunto, ni aún los detalles de la marcha de la administración, y mucho menos la situación financiera del país que estamos representando, porque tenemos que proceder

sin los elementos más necesarios para formar nuestro juicio.

Entonces, ¿qué nos queda?

Nos queda la tribuna. Y digo, señor presidente, que este Congreso no sería Congreso en este momento, si no tuviera el ejercicio libre de la palabra: si el Congreso enmudece, ¡deja de ser Congreso!...

—Las manifestaciones de aprobación en la barra y en el recinto apagan por un instante la voz del orador.

Y bien, señor presidente, nos queda la palabra, y no es poco, puesto que ella puede mantenernos en el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y ofrecernos muchas otras ventajas, porque es la palabra la que gobierna al mundo, no desde hoy, sino desde muchos años atrás.

Fuera escuchada la palabra profética de Thiers por Francia, habría evitado los peligros que le esperaban en Sedán; fué la palabra libre, el verbo encarnado en la tribuna inglesa por Sheridan, la que denunció a la civilización y al mundo la barbarie del gobierno de la India y transformó con su influencia, al cabo de los años, una simple posesión comercial en el más vasto imperio de nuestros días; fué la palabra libre la que en la tribuna de Estados Unidos ha conquistado con Webster la libertad de cuatro millones de hombres; y es la palabra libre, representada en la tribuna argentina por sus grandes oradores, por Rawson, por Mitre, por Sarmiento, por López, por Vélez, por Tejedor, por Alsina, por nuestros adversarios y por nuestros amigos, la que ha formado nuestra nacionalidad, hasta constituir la patria que tenemos y asegurar las instituciones de que hoy disfrutamos.

Siendo, pues, esta la tradición y la historia de la tribuna parlamentaria en Europa, en América, en nuestro propio país, me amparo de esa tradición y de esos nombres y digo: vengo a usar de la tribuna argentina tal como la han dejado constituida nuestros predecesores; vengo a usar de ella con toda la amplitud de mi albedrío personal, sin más limitación que mi propio criterio. Si extralímite mis derechos, si salgo de las reglas del debate, la Cámara tiene su reglamento para contenerme; pero no admito, no debo admitir que, al ejercer mis funciones de senador, usando de la palabra, en las condiciones desventajosas en que me encuentro, representando a la minoría de la Comisión, con la oposición del Poder Ejecutivo y la perspectiva de que seré vencido en la votación de la

Cámara, no puedo admitir, digo, que se pongan vallas al uso de mi palabra, diciéndome: ¡de ahí no has de pasar!

El Senado, señor presidente, ha dado felizmente testimonio de que, ante todo, respeta la libertad de la palabra, y si me he extendido en estas consideraciones ha sido para salvar mis derechos y al mismo tiempo las prerrogativas de todos los miembros del Senado. (*Muy bien! Aplausos en la barra.*)

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se votará si el punto está suficientemente discutido.

Sr. Gelabert. — Pido la palabra.

Voy a permitirme dar algunas breves explicaciones para manifestar las razones en virtud de las cuales voy a negar mi voto al proyecto que se discute.

Después de las consideraciones que han expuesto los señores senadores que han usado de la palabra, sería inoportuno que yo pretendiera traer nada más convincente a este debate, y es por eso que, como he dicho, voy a limitarme únicamente a dar las razones de mi voto.

Yo creo firmemente que el gobierno de Corrientes ha estado inspirado en el mejor desecho del bien de aquella provincia, ha consentido en la cesión solicitada por el Poder Ejecutivo de la Nación; pero no obstante esta creencia, señor presidente, han pesado tanto en mi ánimo las razones expuestas por el honorable senador por Buenos Aires en contra de la cesión del territorio de Posadas, que he creído que esa cesión no puede hacerse sino por medio de una convención constituyente convocada con ese objeto.

A todo esto, hay que agregar la circunstancia de haberse sancionado la ley que autorizó esa cesión, en una sesión secreta, lo que también ha contribuido a inducirme a negarle mi voto, como voy a hacerlo, a la cesión de que se trata.

Y debo declarar que me siento contrariado, señor presidente, porque habría deseado que este acto hubiese estado justificado por alguna necesidad suprema, a fin de poder concurrir a que se llenaran los propósitos del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Corrientes, que es la expresión genuina de mi partido, y que a pesar de todos los antecedentes citados por el señor senador por Corrientes, refiriéndose a la época de revuelta en que se estableció, no puede negarse, señor presidente, que el mismo gobernador derrocado legalizó la situación que dió por resultado su retiro del poder.

En los dos años que han transcurrido se ha regularizado completamente, tanto la situación

del Poder Ejecutivo como de las Cámaras, y no comprendo cómo es que el mismo señor senador por Corrientes pueda decir que la situación de ésta es de tal naturaleza, que hasta peligra la existencia de los individuos cuyas opiniones son contrarias a las del partido que hoy gobierna, cuando el mismo señor senador va allí todos los años y hace lo que quiere.

Sr. Baibiene. — A la costa del Paraná.

Sr. Gelabert. — Si fuera cierto lo que dice el señor senador, correría más peligro, por hallarse en un punto que está situado en la frontera.

También debo levantar el otro cargo que el señor senador ha hecho refiriéndose a los miles de emigrados que no han vuelto aún a la provincia de Corrientes.

Se olvida el señor senador de que esos son emigrados de hace seis años, que no pueden volver aún, porque se han retirado con sus haciendas, a consecuencia del desquicio en que se encontró la provincia en el año 1878. Es por eso que esa provincia vive agobiada hasta el presente, a consecuencia de aquellos trastornos y de las consecuencias naturales sobrevenidas desde 1880.

Creo, pues, como el señor senador por Buenos Aires, que la capital de Misiones debe ser colocada en Concepción, a fin de asegurar el dominio de las costas del Uruguay que facilita la correspondencia con los poderes nacionales. Es en este sentido que creo completamente inconveniente la colocación de la capital en un lugar tan opuesto como es el de Posadas, que vendrá hasta interrumpir el tránsito de varios

departamentos de la provincia, que no teniendo más camino por dónde atravesar, tendrían que pedir licencia para pasar por allí.

Por otra parte, la cesión de Posadas dará por resultado que en vez de ser un pueblo libre, vendrá a quedar como una colonia militarizada.

Como la hora es ya demasiado avanzada y se ha dilucidado esta cuestión con la lucidez con que acostumbran a hacerlo los honorables senadores que han hecho uso de la palabra, no voy a extenderme más sobre este asunto limitándome a las breves razones que he manifestado, en virtud de las cuales voy a negarle mi voto al proyecto que se discute.

Sr. Avellaneda. — Pienso que el debate se encuentra realmente agotado, y como por otra parte la hora es tan avanzada, sería inoportuno entretener a la Cámara con otro discurso; pero quiero que por una palabra o por un signo cualquiera, conste el voto que he de dar en contra del proyecto de que se trata. Con este motivo pronuncio las que la Cámara acaba de escuchar.

—Dado el punto por suficientemente discutido, se vota en general el dictamen de la mayoría de la Comisión, y resulta aprobado por afirmativa de 22 votos contra 8.

—En particular obtiene el mismo resultado.

—En seguida se levanta la sesión siendo las 7 de la tarde.